



BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

VI LEGISLATURA

Serie A:
PROYECTOS DE LEY

30 de marzo de 1998

Núm. 81-10

INFORME DE LA PONENCIA

121/000077 Cooperación Internacional para el desarrollo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional para el desarrollo (núm. expte. 121/77).

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados, **Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde**.

A la Comisión de Asuntos Interiores

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (expte. nº 121/77), integrada por los Diputados D. Pablo Izquierdo Juárez (GP), D. José María Robles Fraga (GP), D. Teófilo de Luis Rodríguez (GP), D. Rafael Estrella Pedrola (GS), D. Francisco Fuentes Gallardo (GS), D. José Navas Amores (GIU), D. Lluís Recoder i Miralles (GC-CiU), D. Carlos Caballero Basáñez (GV-PNV), D. Jesús Gómez Rodríguez (GCC), y D. José Saura Laporta (GMx), ha estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento elevan a la Comisión el siguiente:

I N F O R M E

Consideraciones generales

El texto del proyecto que figura como anexo al presente informe de la ponencia fue adoptado por mayoría de los

Grupos Popular, Catalán y Vasco. Se ha mantenido la numeración del proyecto, a pesar de que se hayan incorporado nuevas secciones, artículos, párrafos o letras cuya ordenación final se efectuará tras el debate y aprobación en la Comisión.

Artículo 1

En el artículo primero de la Ley el Grupo Popular presentó un texto que recoge el contenido de las enmiendas 324 del Grupo Catalán, 54 del Grupo Vasco y 117 y 118 del Grupo Socialista. Tras el debate correspondiente el texto propuesto se modificó conforme a las aportaciones de los distintos miembros de la Ponencia quedando el artículo 1 redactado de la siguiente manera:

CAPÍTULO I

La política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

SECCIÓN PRIMERA

«Artículo 1. Objeto de la ley y ámbito de aplicación.

1. La presente Ley tiene como objeto la regulación del régimen jurídico de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

A los efectos de esta Ley se entiende por política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo el conjunto de actividades que se traduce en transferencias de recursos públicos materiales y humanos que la Adminis-

tración General del Estado por sí o en colaboración con entidades privadas destina a los países en vías de desarrollo directamente o a través de organizaciones multilaterales.

Asimismo establece los principios, objetivos y prioridades de la política de cooperación para el desarrollo del conjunto de administraciones públicas españolas, así como los sistemas de relación y colaboración entre dichas administraciones públicas.

Para que dichos recursos tengan la consideración de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), deberán cumplir los requisitos marcados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD).

2. Es Cooperación Internacional para el Desarrollo el conjunto de recursos y capacidades que España pone a disposición de los países en vías de desarrollo con el fin de facilitar a impulsar su progreso económico y social y para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo en todas sus manifestaciones.

3. La cooperación española impulsará procesos de desarrollo que atiendan a la defensa y protección de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social, la sostenibilidad y regeneración del medio ambiente, en los países que tienen elevados niveles de pobreza y en aquellos que se encuentran en transición hacia la plena consolidación de sus instituciones democráticas y su inserción en la economía internacional.»

Las enmiendas núms. 3 y 4 (GIU), 84 (GCC), 207 (Sra. Rivadulla Gracia-GMx) y 282 (GP) fueron rechazadas.

Artículo 2

SECCIÓN SEGUNDA

Principios, objetivos y prioridades de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

«Artículo 2. Principios

La política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, inspirada en la Constitución, expresa la solidaridad del pueblo español con los países en desarrollo y particularmente con los pueblos más desfavorecidos de otras naciones y se basa en un amplio consenso político y social a escala nacional, de acuerdo con los siguientes principios:

a) El reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y colectiva, como protagonista y destinatario último de la política de Cooperación para el Desarrollo.

b) La defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la participación ciudadana en condiciones de igualdad para mujeres y hombres y en general la no discriminación por razón de sexo, raza, cultura o religión y el respeto a la diversidad.

c) La necesidad de promover un desarrollo humano global, interdependiente, participativo, sostenible y con equidad de género en todas las naciones, procurando la aplicación del principio de corresponsabilidad entre los Estados, en orden a asegurar y potenciar la eficacia y coherencia de las políticas de Cooperación al Desarrollo en su objetivo de erradicación de la pobreza en el mundo.

d) La promoción de un crecimiento económico duradero y sostenible de los países acompañada de medidas que promuevan una redistribución equitativa de la riqueza para favorecer la mejora de las condiciones de vida y el acceso a los servicios sanitarios, educativos y culturales así como el bienestar de sus poblaciones.

e) El respeto a los compromisos adoptados en el seno de los Organismos Internacionales.»

Como consecuencia de esta redacción se consideraron aceptadas las enmiendas 55 y 56 del Grupo Vasco, 283 y 284 del Grupo Popular, 119 y 121 del Grupo Socialista, 208 de la Sra. Rivadulla (GMx), 285 del Grupo Popular, 286 del Grupo Popular, 122 del Grupo Socialista, 208, 209 y 210 de la Sra. Rivadulla (GMx), 325 del Grupo Catalán (CiU). Se rechazaron las demás enmiendas al articulado 85 (GCC), 5 y 6 (GIU), 120 (GS), 357 y 359 de la Sra. Rivadulla (GMx).

Artículo 3

Tras el debate de las enmiendas al artículo 3 se acordó un texto cuya redacción es la siguiente:

«Artículo 3. Objetivos

La política de Cooperación Internacional para el Desarrollo es parte de la política exterior que dirige el Gobierno. Su ejecución se integra en la acción exterior del Estado con observancia del principio de unidad de la misma.

El principio de unidad de acción del Estado en el exterior se aplicará conforme a la normativa vigente y en el marco de las competencias de las distintas administraciones públicas.

La política de Cooperación Internacional para el Desarrollo determinará estrategias y acciones dirigidas a la promoción del desarrollo sostenible humano, social y económico para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo a través de los siguientes objetivos:

a) Fomentar con recursos humanos y materiales el desarrollo de los países más desfavorecidos para que puedan alcanzar un crecimiento económico con un reparto más equitativo de los frutos del desarrollo, favoreciendo las condiciones para el logro de un desarrollo autosostenido a partir de las propias capacidades de los beneficiarios, propiciando una mejora en el nivel de vida de las poblaciones beneficiarias en general y de sus capas más necesitadas en particular, y promoviendo mayores garantías de estabilidad y participación democrática en el marco del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres y hombres.

b) Contribuir a un mayor equilibrio en las relaciones políticas, estratégicas, económicas y comerciales, promoviendo así un marco de estabilidad y seguridad que garantice la paz internacional.

c) Prevenir y atender situaciones de emergencia mediante la prestación de acciones de ayuda humanitaria.

c) bis. Favorecer la instauración y consolidación de los regímenes democráticos y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

d) Impulsar las relaciones políticas, económicas y culturales con los países en vías de desarrollo.»

Como consecuencia de esta redacción se aceptaron las enmiendas 287 del Grupo Popular, 125 del Grupo Socialista, 327 y 328 del Grupo Catalán. Las enmiendas 7 y 8 (GIU), 57 (GV-PNV), 74 de la Sra. Lasagabaster (GMx), 86 (GCC), 123 a 129 (GS), 211 a 216 de la Sra. Rivadulla (GMx), 326 (GC-CiU) y 360 de la Sra. Almeida (GMx) no fueron aceptadas.

Artículo 3 bis

A continuación se analizó un nuevo art. 3 bis propuesto por la enmienda 329 del Grupo Catalán que es aprobado también por el Grupo Popular con la siguiente redacción:

«Artículo 3 bis.

Los principios y objetivos señalados en los artículos anteriores informarán todas las políticas que apliquen las Administraciones Públicas en el marco de sus respectivas competencias y que puedan afectar a los países en vías de desarrollo.»

No fue aceptada la redacción de la enmienda 217 de la Sra. Rivadulla (GMx).

Artículo 4

Se analizó a continuación el artículo 4 cuya redacción que se aprobó es la siguiente:

«Artículo 4. Prioridades

La política española de Cooperación para el Desarrollo, como reflejo de la diversidad de situaciones sobre las que opera y del diferente grado de urgencia para acometer las acciones de intervención concretas, se articula en torno a dos ejes de prioridades que determinarán sus líneas de actuación preferente:

a) Geográficas, orientadas a las regiones y países que serán objeto preferente de la Cooperación española.

b) Sectoriales, dirigidas a determinados ámbitos de actuación preferente.

La definición de estas prioridades, que serán establecidas periódicamente en los sucesivos Planes Directores

cuatrienales a que se refiere el artículo 7, responderá a los objetivos de la política exterior del Estado, tendrá en cuenta las consideraciones señaladas en el artículo anterior, y aplicará especial atención a la Cooperación con los países de menor desarrollo económico y social y dentro de éstos a los sectores más desfavorecidos.»

Con esta redacción se consideraron aceptadas las enmiendas 288 y 289 del Grupo Popular y 330 del Grupo Catalán.

Se rechazaron las enmiendas núms. 9 (GIU), 58 (GV-PNV), 76 (Sra. Lasagabaster-GMx), 87 (GCC), 130, 131 y 132 (GS), 218 y 219 Sra. Rivadulla-GMx).

Artículo 5

Se analizó el artículo 5. En este artículo que había sido redactado conforme a las enmiendas 133 y 134 del Grupo Socialista se introdujeron algunas modificaciones quedando el artículo redactado de la siguiente manera:

«Artículo 5. Prioridades geográficas.

1. Marco bilateral.

Sin perjuicio del establecimiento de otras áreas territoriales según lo establecido en el artículo 4 se considerarán como áreas geográficas de actuación preferente a los países de Iberoamérica, los países árabes del Norte de África y de Oriente Medio, así como aquellos otros de menor desarrollo con los que España mantenga especiales vínculos de carácter histórico o cultural.

2. Marco multilateral.

España impulsará la coherencia de las políticas comunitarias, la progresiva construcción de la política de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea y contribuirá a su eficaz aplicación y ejecución, con especial atención a los países y áreas mencionadas en el apartado anterior.

Por otra parte, España participará activamente en los Organismos Internacionales de Cooperación para el Desarrollo de los que sea miembro, tanto financieros como no financieros y colaborará en la consecución de sus objetivos adoptando las medidas que resulten más adecuadas.»

La redacción del artículo aceptó en parte las enmiendas 133 y 134 del Grupo Socialista y la enmienda del Grupo Catalán 331.

Se rechazaron las enmiendas núms. 10 (GIU), 77 (Sra. Lasagabaster-GMx), 88 (GCC), 220 (Sra. Rivadulla-GMx) y 361 (Sra. Almeida-GMx).

Artículo 6

Quedó redactado de la siguiente manera:

«Artículo 6. Prioridades Sectoriales

La política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su objetivo de luchar contra la pobreza en todas sus manifestaciones, se orientará especialmente a las siguientes prioridades sectoriales:

a) Servicios sociales básicos, con especial incidencia en salud, saneamiento, educación y formación de recursos humanos.

a) bis. Satisfacción de las necesidades básicas, obtención de la seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza.

a) ter. Mejora de los servicios de salud y de saneamiento básico.

a) quater. Apoyo a la educación y a la formación de recursos humanos.

b) Dotación, mejoramiento o ampliación de infraestructuras. Desarrollo de la base productiva y fomento del sector privado.

c) Protección de los derechos humanos, participación e integración social de la mujer, defensa de los grupos de población más vulnerables (menores, refugiados, desplazados, retornados, indígenas).

c) bis. Respeto de los derechos humanos, apoyo a las estructuras democráticas y de la sociedad civil y fortalecimiento de la capacidad de las Instituciones, especialmente las más próximas al ciudadano, para atender las necesidades de la población.

c) ter. Potenciación de la participación de la mujer en los procesos de desarrollo e igualdad de oportunidades.

c) quater. Respeto a la interculturalidad e igualdad de oportunidades de las minorías étnicas.

d) Fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la sociedad civil.

e) Protección y mejora de la calidad del Medio Ambiente, conservación racional y utilización renovable y sostenible de los recursos naturales.

f) Cultura, con especial incidencia en la defensa de los aspectos que definan la identidad cultural dirigida al desarrollo endógeno y los que favorezcan la promoción cultural y el libre acceso a equipamientos y servicios culturales de todos los sectores de la población potencialmente beneficiaria.

f) bis. Desarrollo de la investigación científica y tecnológica, y su aplicación a los proyectos de Cooperación para el Desarrollo.»

Como consecuencia de esta redacción se aceptaron las enmiendas 291 del Grupo Popular, 135, 136 y 137 del Grupo Socialista, 290 del Grupo Popular, 138, 139, 140 y 146 del Grupo Socialista.

Resultaron rechazadas las enmiendas 89 (GCC), 141, 142, 143, 144, 145 y 147 (GS), 221, 222, 223, 224, 225 y 226 (Sra. Rivadulla-GMx) y 11 (GIU).

Artículo 7

El artículo 7 queda redactado de la siguiente forma:

CAPÍTULO II

Planificación, instrumentos y modalidades de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

«Artículo 7. Planificación

1. La política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo se establecerá a través de Planes Directores y Planes Anuales.

2. El Plan Director, elemento básico de la planificación de la Política Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se formulará cuatrienalmente y contendrá las líneas generales y directrices básicas de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo señalando los objetivos y prioridades, así como los recursos presupuestarios indicativos que orientarán la actuación de la cooperación española a medio plazo.

3. Los Planes Anuales desarrollarán con esa periodicidad los objetivos, prioridades y recursos establecidos en el Plan Director.»

Se aceptaron las enmiendas 292 (GP) y en parte la 148 (GS).

No se aceptaron las enmiendas 149 a 152 del Grupo Socialista. La redacción del artículo ha variado como consecuencia de la redacción del artículo 12.

Artículo 8

La redacción aprobada es la siguiente:

«Artículo 8. Instrumentos

La política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo se pone en práctica a través de los siguientes instrumentos:

a) Cooperación técnica.

b) Cooperación económica y financiera.

c) Ayuda humanitaria, tanto alimentaria como de emergencia, incluyendo operaciones de mantenimiento de la paz, instrumentada por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales.

d) Educación para el desarrollo y sensibilización social.»

Se aceptaron las enmiendas 293 y 294 del Grupo Popular. Como consecuencia de la no aceptación de la enmienda 158 (GS) al artículo 10, se rechazó también la enmienda nº 154 de dicho Grupo. Asimismo, se rechazaron las enmiendas 153 del Grupo Socialista, 227 de la Sra. Rivadulla (GMx), 13 del Grupo IU, 155 del Grupo Socialista, 90 del Grupo Coalición Canaria, 228 de la Sra. Rivadulla (GMx), 362 de la Sra. Almeida (GMx), 12 del Grupo IU, 78 de la Sra. Lasagabaster (GMx) y 230 de la Sra. Rivadu-

lla (GMx). Se aceptaron las enmiendas 156 (GS) y 229 de la Sra. Rivadulla (GMx).

Artículo 9

Tras el debate correspondiente se aprobó el artículo 9 con la redacción siguiente:

«Artículo 9. Cooperación Técnica

La cooperación técnica para el desarrollo incluye cualquier modalidad de asistencia dirigida a la formación de recursos humanos del país receptor, mejorando sus niveles de instrucción, adiestramiento, cualificación y capacidades técnicas y productivas en los ámbitos institucional, administrativo, económico, sanitario, social, cultural, educativo, científico o tecnológico.

La Cooperación técnica se articulan mediante programas y proyectos de refuerzo de la formación de cuadros en todos los sectores y niveles, y mediante programas y proyectos de asesoramiento técnico con asistencia de expertos, agentes sociales, Organizaciones No Gubernamentales, empresas españolas, aportación de estudios o transferencia de tecnologías.»

Como consecuencia de esta redacción no se aceptaron las enmiendas 14 del Grupo IU, 157 del Grupo Socialista y se consideraron aceptadas las enmiendas núms. 295 del Grupo Popular, 332 del Grupo Catalán y 363 de la Sra. Almeida (GMx).

Artículo 10

El artículo 10 mantiene la redacción del Proyecto de Ley:

«Artículo 10. Cooperación Económica y Financiera

La cooperación económica se expresa a través de aportaciones destinadas a proyectos de inversión para el aumento del capital físico de los países beneficiarios y a proyectos de ayuda a los sectores económicos (agroalimentario, educativo, sanitario, infraestructuras, transporte y otros).

La cooperación financiera se manifiesta a través de contribuciones oficiales a organismos internacionales de carácter económico y financiero, acuerdos financieros de alivio o condonación de deuda suscritos por vía bilateral o multilateral, donaciones, préstamos o ayudas instrumentadas para que los países receptores puedan afrontar dificultades coyunturales de ajuste en sus Balanzas de Pagos, y otros establecidos en términos concesionales con cargo a que se refiere el art. 24, así como dotaciones a los ya existentes fondos de Ayuda al Equipamiento, gestionados directamente por la Agencia Española de Cooperación Internacional con cargo a su propio presupuesto.»

Se rechazan las enmiendas 158 del Grupo Socialista, 91 del Grupo Coalición Canaria, 231 de la Sra. Rivadulla (GMx) y 15 del Grupo IU.

Artículos 10 bis (nuevo) y 10 ter (nuevo)

A continuación la Ponencia aprobó los artículos nuevos 10 bis y 10 ter que son consecuencia de la aceptación de las enmiendas 159 y 160 del Grupo Socialista.

La redacción de estos artículos que se aprueban es la siguiente:

«Artículo 10 bis (nuevo). Ayuda humanitaria

La ayuda humanitaria consiste en el envío urgente, con carácter no discriminado, del material de socorro necesario, incluida la ayuda alimentaria de emergencia, para proteger vidas humanas y aliviar la situación de las poblaciones víctimas de catástrofe natural o causadas por el hombre o que padecen una situación de conflicto bélico. Esta ayuda la llevan a cabo las Administraciones Públicas directamente o a través de Organizaciones No Gubernamentales y Organismos Internacionales.

La ayuda humanitaria podrá dar paso a actividades de rehabilitación, de reconstrucción de infraestructuras, restablecimiento institucional o de reinserción de poblaciones afectadas, debiendo promoverse la mayor coordinación posible entre las entidades que colaboren y respecto de las instituciones u organizaciones locales, a fin de tener en cuenta los objetivos del Desarrollo a medio y largo plazo.

La Cooperación española promoverá el respeto al derecho humanitario y asimismo apoyará en este ámbito medidas para la prevención y resolución de conflictos, incluyendo las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz, instrumentadas por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales.»

«Artículo 10 ter (nuevo). Educación para el desarrollo y sensibilización social.

Se entiende por educación para el desarrollo y sensibilización social el conjunto de acciones que desarrollan las Administraciones Públicas, directamente o en colaboración con las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, para promover actividades que favorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia los problemas que afectan a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad y cooperación activas con los mismos, por la vía de campañas de divulgación, servicios de información, programas formativos, apoyo a las iniciativas en favor de un Comercio justo y Consumo responsable respecto de los productos procedentes de los países en desarrollo.»

Como consecuencia de esta redacción se aceptaron también las enmiendas 232 y 233 de la Sra. Rivadulla (GMx).

Artículo 10 quáter (nuevo)

La Ponencia analizó el artículo 10 quater propuesto por la enmienda 161 del Grupo Socialista que no es aprobado.

Artículo 11

Fue aprobado con la redacción siguiente:

«Artículo 11. Modalidades

1. Los programas, proyectos y acciones de cooperación para el desarrollo pueden financiarse y ejecutarse de forma bilateral o multilateral.

2. La cooperación bilateral consiste en el conjunto de actividades de cooperación para el desarrollo realizadas por las Administraciones públicas directamente con el país receptor o bien las instrumentadas a través de organizaciones de desarrollo desprovistas de carácter oficial.

3. La cooperación multilateral es la realizada a través de transacciones de cualquier tipo o las contribuciones realizadas a organizaciones internacionales cuyas actividades se dirijan total o parcialmente a la promoción del bienestar económico y social de las poblaciones de los países en vías de desarrollo.

El carácter multilateral de dichas organizaciones se determinará a través de la aplicación de los siguientes criterios:

a) Que se trate de una Agencia, institución u organización cuyos miembros son Gobiernos.

b) Que sea un fondo gestionado de forma autónoma por uno de los órganos multilaterales comprendidos en el apartado a).»

La redacción supone la aceptación de las enmiendas 296 y 297 del Grupo Popular rechazándose las enmiendas 16 del Grupo IU, 162 del Grupo Socialista, 234 y 235 de la Sra. Rivadulla (GMx).

Artículo 11 bis (nuevo)

Tampoco se aprobó la introducción de un nuevo artículo 11 bis propuesto por la enmienda 163 del Grupo Socialista.

CAPÍTULO III

Se rechazó la enmienda núm. 164 (GS).

SECCIÓN PRIMERA

Se rechazó la enmienda núm. 166 (GS).

Artículo 12

Siguiendo las enmiendas del Grupo Popular 298, 299, 300, 301 y 302 y la de la Sra. Rivadulla (GMx) 236, el artículo 12 quedó redactado de la siguiente manera:

CAPÍTULO III

Organos competentes en la formulación y ejecución de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

SECCIÓN PRIMERA

Órganos rectores

«Artículo 12. El Congreso de los Diputados

1. Al Congreso de los Diputados corresponde establecer cada cuatro años en la forma y modo que se determine y a propuesta e iniciativa del Gobierno, las líneas generales y directrices básicas de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. A tal efecto, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados, posteriormente a su aprobación, el Plan Director Plurianual al que se refiere el artículo 7 para su debate y dictamen.

2. El Congreso de los Diputados debatirá anualmente, en la forma y modo que se determine y a propuesta e iniciativa del Gobierno, la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. A tal efecto, el Gobierno remitirá a la Cámara, posteriormente a su aprobación, el Plan Anual al que se refiere el artículo 7 para su debate y dictamen.

3. Se constituirá una Comisión Parlamentaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Congreso de los Diputados, de conformidad con lo que disponga el Reglamento de la Cámara.

Esta Comisión será informada por el Gobierno del nivel de ejecución y grado de cumplimiento de los programas, proyectos y acciones comprendidos en el Plan Director y el Plan Anual, y recibirá cuenta de la evaluación de la cooperación, así como de los resultados que refleje el Documento de Seguimiento del Plan Anual del ejercicio precedente.»

Como consecuencia de esta redacción quedaron rechazadas las enmiendas 92 del Grupo Coalición Canaria, 165 del Grupo Socialista, 17 del Grupo IU y 364 de la Sra. Almeida (GMx).

Artículo 13

El artículo quedó redactado de la manera siguiente:

«Artículo 13. El Gobierno

El Gobierno define y dirige la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, el Gobierno aprueba el Plan Director y el Plan Anual.»

En la redacción de este artículo se aceptó la enmienda 333 del Grupo Catalán y se rechazaron las enmiendas 18 del Grupo IU, 166 del Grupo Socialista, 237 de la Sra. Rivadulla (GMx) y 79 de la Sra. Lasagabaster (GMx).

Artículo 14

La redacción del artículo 14 queda igual que el texto del Proyecto de Ley rechazándose, por tanto, las enmiendas núms. 18 (GIU), 80 (Sra. Lasagabaster-GMx), 167 (GS), 238 y 240 (Sra. Rivadulla-GMx) y 365 (Sra. Almeida-GMx).

«Artículo 14. El Ministro de Asuntos Exteriores

Sin perjuicio de las competencias que los diferentes Departamentos ministeriales puedan tener en materia de Cooperación para el Desarrollo, el Ministro de Asuntos Exteriores, como responsable de la ejecución de la política exterior del Estado, lo es también de la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la coordinación de los órganos de la Administración General del Estado que tengan legalmente atribuidas competencias en esta materia.»

Artículo 15

Quedó redactado igual en el texto del Proyecto de Ley. Se retiró la enmienda 334 del Grupo Catalán como consecuencia de la aceptación de su contenido en otros artículos de la ley y se rechazaron las enmiendas núms. 18 (GIU), 168 (GS), 241 (Sra. Rivadulla-GMx) y 366 (Sra. Almeida-GMx).

«Artículo 15. Otros Ministerios

Los Ministerios que realicen actividades en materias de Cooperación Internacional para el Desarrollo serán responsables de la ejecución de los programas, proyectos y acciones dentro del ámbito de sus competencias, que serán coordinadas a través de los órganos establecidos al efecto en esta Ley, con observancia del principio de la unidad de acción del Estado en el exterior.»

Artículo 16

El artículo 16 quedó redactado conforme a las enmiendas 303 y 304 del Grupo Popular y 59 del Grupo Vasco. Quedaron rechazadas las enmiendas núms. 18 (GIU), 93 (GCC), 169 (GS), 242 y 243 (Sra. Rivadulla-GMx) y 367 (Sra. Almeida-GMx).

«Artículo 16. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI)

1. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica es el órgano del Ministerio de Asuntos Exteriores que, por delegación de su titular, coordina la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo, administra los recursos a que se refiere el art. 24.2.1, asegura la participación española en las organizaciones internacionales de Ayuda al Desarrollo y define la posición de España en la formulación de la política comunitaria de Desarrollo.

2. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, como órgano superior del Ministerio de Asuntos Exteriores, asiste al titular del Departamento en la formulación y ejecución de la política de Cooperación para el Desarrollo y asume la programación, dirección, seguimiento y control de las actividades consiguientes.

3. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, previo dictamen del Consejo de Cooperación al Desarrollo y de la Comisión Interterritorial de Cooperación, formula la propuesta del Plan Director y del Plan Anual, así como la definición de las prioridades territoriales y sectoriales a que se refiere el art. 4.

4. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica en el marco de sus competencias evaluará la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los programas y proyectos financiados con fondos del Estado en curso de ejecución y los finalizados, desde su concepción y definición hasta sus resultados. La evaluación tendrá en cuenta la pertinencia de los objetivos y su grado de consecución, así como la eficiencia y eficacia alcanzadas, el impacto logrado y la viabilidad comprobada en los programas y proyectos ya finalizados.»

SECCIÓN SEGUNDA (nueva)

Como consecuencia de la aceptación de la enmienda n.º 60 (GV-PNV), se crea una Sección Segunda nueva con la siguiente rúbrica:

«SECCIÓN SEGUNDA (nueva)

Comunidades Autónomas y Entidades Locales»

Artículo 16 bis (nuevo)

Se aceptó la propuesta de un nuevo artículo 16 bis que es la enmienda 61 del Grupo Vasco con algunas modificaciones técnicas.

«Artículo 16 bis. Cooperación para el Desarrollo de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

1. La Cooperación para el Desarrollo que se realice desde las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, expresión solidaria de sus respectivas sociedades, se inspira en los principios, objetivos y prioridades estableci-

das en la Sección Segunda del Capítulo I de la presente Ley.

2. La acción de dichas Entidades en la Cooperación para el Desarrollo se basa en los principios de autonomía presupuestaria y autoresponsabilidad en su desarrollo y ejecución, debiendo respetar las líneas generales y directrices básicas establecidas por el Congreso de los Diputados a que se refiere el artículo 12.1 de la presente Ley y el principio de colaboración entre Administraciones Públicas en cuanto al acceso y participación de la información y máximo aprovechamiento de los recursos públicos.»

SECCIÓN SEGUNDA (pasará a ser la TERCERA)

Se aceptó la enmienda núm. 305 (GP) a la rúbrica que quedó redactada de la siguiente forma:

«SECCIÓN SEGUNDA (SECCIÓN TERCERA nueva)

«Órganos consultivos y de coordinación»

Artículo 17

Se rechazaron las enmiendas 170 (GS) y 19 (GIU) y se aceptaron las enmiendas 306 y 307 (GP) y en consecuencia el artículo 17 quedó redactado de la siguiente manera:

«Artículo 17. Organos consultivos y de coordinación de Cooperación para el Desarrollo.

Los órganos consultivos y de coordinación de Cooperación para el Desarrollo:

- a) El Consejo de Cooperación al Desarrollo.
- b) La Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo.
- c) La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.

Su composición, competencias, organización y funciones se establecen por las correspondientes normas de desarrollo reglamentario.»

Artículo 18

Se rechazaron las enmiendas núms. 20 (GIU), 171 (GS), 94 (GCC), 368 (Sra. Almeida, GMx) y 244, 245 y 247 (Sra. Rivadulla Gracia-GMx). Se aceptaron las enmiendas 308 (GP) y 62 (GV-PNV) y en parte las enmiendas núms. 335 (GC-CiU), 369 (Sra. Almeida Castro-GMx) y 246 (Sra. Rivadulla Gracia-GMx).

En consecuencia, el artículo quedó redactado de la siguiente manera:

«Artículo 18. El Consejo de Cooperación al Desarrollo.

1. El Consejo de Cooperación al Desarrollo es el órgano consultivo de la Administración General del Estado para la definición de la política de Cooperación para el Desarrollo.

2. En el Consejo de Cooperación al Desarrollo, además de la Administración, participarán los agentes sociales, expertos, organizaciones no gubernamentales especializadas e instituciones y organismos de carácter privado presentes en el campo de la Ayuda al Desarrollo.

3. El Consejo de Cooperación al Desarrollo informará la propuesta del Plan Director del Plan Anual y conocerá los resultados del Documento de Seguimiento del Plan Anual y de la Evaluación de la Cooperación.

4. Se someterán a informe previo del Consejo los anteproyectos de ley y cualquiera otras disposiciones generales de la Administración del Estado que regulen materias concernientes a la Cooperación para el Desarrollo. De las conclusiones de estos informes se dará conocimiento a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados.

5. El Consejo de Cooperación al Desarrollo será dotado con los recursos necesarios para poder cumplir sus objetivos.»

Artículo 19

Se rechazaron las enmiendas 248, 249, 250 y 251 (Sra. Rivadulla Gracia-GMx) y se aprobó un texto que es el resultado de la aceptación de las enmiendas núms. 83 (Sra. Lasagabaster Olazábal GMx), 63 (GV-PNV), 336, 337 y 338 (GC-CiU) y 64 y 65 (GV-PNV). También se consideró parcialmente aceptada la enmienda 172 (GS).

Como consecuencia de ello el texto aprobado es el siguiente:

«Artículo 19. La Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo.

1. La Comisión Interterritorial de Cooperación es el órgano de coordinación, concertación y coordinación entre las Administraciones Públicas que ejecuten gastos computables como Ayuda Oficial al Desarrollo.

2. Las funciones de la Comisión se dirigirán a promover los siguientes objetivos:

a) La coherencia y complementariedad de las actividades que realicen las Administraciones Públicas en el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo.

b) El mayor grado de eficacia y eficiencia en la identificación, formulación y ejecución de programas y proyectos de Cooperación al Desarrollo impulsados por las distintas Administraciones Públicas, plenamente autónomas a esos efectos, en el marco de sus respectivas competencias.

c) La participación de las Administraciones Públicas en la formación del Plan Director y del Plan Anual, así como en la definición de sus prioridades.

3. Se someterán a informe previo de la Comisión los anteproyecto de ley y cualesquiera otras disposiciones generales que regulen materias concernientes a la Cooperación al Desarrollo.

4. Reglamentariamente se regulará su composición y funcionamiento, garantizándose la presencia e intervención de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales o de aquellas instancias de coordinación supramunicipal en quién estos expresamente deleguen.»

Artículo 20

Se rechazaron las enmiendas núms. 21 (GIU), 173 (GS), 252 (Sra. Rivadulla Gracia-GMx) y 370 (Sra. Almeida Castro-GMx) y se aceptó la enmienda nº 309 (GP) y en consecuencia el artículo queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 20. La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.

1. La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional es el órgano de coordinación técnica interdepartamental de la Administración General del Estado en materia de Cooperación para el Desarrollo.

2. La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional someterá a la aprobación del Gobierno a través del Ministro de Asuntos Exteriores las propuestas del Plan Director y Plan Anual y conocerá los resultados del Documento de Seguimiento del Plan Anual y de la Evaluación de la Cooperación.»

SECCIÓN TERCERA

Se rechazó la enmienda 68 (GV-PNV).

Artículo 21

Se rechazaron las enmiendas núms. 22 (GIU), 174 (GS), 371 (Sra. Almeida Castro-GMx), 253 y 254 (Sra. Rivadulla Gracia-GMx). Se aceptó la enmienda nº 310 (GP). En consecuencia, el texto aprobado es el siguiente:

SECCIÓN TERCERA

Órganos ejecutivos

«Artículo 21. La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

1. La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, y

presidido por su titular, es el órgano de gestión de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros departamentos ministeriales.

2. En cuanto a su organización, fines, funciones y competencias se estará a lo que disponga su Estatuto, que será aprobado por el Gobierno, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.»

Artículo 22

Se rechazaron las enmiendas núms. 23 (GIU), 175 (GS) y 255 (GMx). Se aprobó un texto que recoge las enmiendas 66 (GCV-PNV y 339 GC-CiU y que es el siguiente:

«Artículo 22. Las Oficinas Técnicas de Cooperación

Las Oficinas Técnicas de Cooperación son unidades adscritas orgánicamente a las Embajadas que, bajo la dirección de su Jefe de Misión y la dependencia funcional de la Agencia Española de Cooperación Internacional, aseguran la coordinación y, en su caso, la ejecución de los recursos de la cooperación en su demarcación. Asimismo, colaborarán con los programas y proyectos impulsados por las demás Administraciones Públicas.»

Artículo 22 bis (nuevo) y SECCIONES TERCERA y CUARTA (nuevas)

En cuanto a las enmiendas núms. 24 (GIU) relativa al artículo 22 bis (nuevo), 60 (GV-PNV) relativa a la Sección 3.^a (nueva) y 176 (GS) relativa a la Sección 4.^a (nueva), se rechazan.

CAPÍTULO IV

SECCIÓN ÚNICA

Se aceptó la enmienda 320 (GP) al título de la Sección que queda de la siguiente manera: «Modalidades de Financiación y Ejecución de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.»

Artículo 23

El texto que se aprobó es el resultado de la incorporación de las enmiendas 311, 312 y 313 (GP) y en parte de la enmienda 256 de la Sra. Rivadulla (GMx). Se rechazaron las enmiendas 25 (GIU) y 177 (GS). La redacción del artículo quedó de la siguiente manera:

CAPÍTULO IV

Recursos materiales

SECCIÓN ÚNICA

Modalidades de Financiación y Ejecución de la Cooperación Internacional para el Desarrollo

«Artículo 23. Colaboración y cofinanciación de programas con Organismos Internacionales.

1. El Gobierno, a fin de coadyuvar al desarrollo de los países menos favorecidos a través de organizaciones internacionales, fomentará la participación de los agentes de cooperación en los programas y proyectos gestionados por esas instancias multilaterales, especialmente los de la Unión Europea.

2. España participará en la cooperación multilateral para el desarrollo a través de las siguientes modalidades:

- a) Contribuciones a organizaciones internacionales de carácter financiero y no financiero.
- b) Aportaciones españolas a los programas de Cooperación de la Unión Europea.
- c) Otros programas que se ejecuten en colaboración o en régimen de cofinanciación con Organismos Internacionales.»

Artículo 23 bis (nuevo)

Se rechazó la enmienda 372 de la Sra. Almeida (GMx).

Artículo 24

Como consecuencia de la aceptación de las enmiendas 314, 315, 316 (GP) y en parte de la 340 (GC-CiU), 67 (GV-PNV), 95 (GCC) y 81 de la Sra. Lasagabaster (GMx), el artículo 24 quedó redactado de la siguiente manera:

«Artículo 24. Financiación y ejecución bilateral

La cooperación bilateral para el Desarrollo se financia según las siguientes modalidades:

1. Recursos gestionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, vinculados a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo social básico de las poblaciones beneficiarias, con cargo a los cuales se instrumentarán:

— Dotaciones presupuestarias dirigidas a la concesión de microcréditos y de créditos rotatorios destinados a la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables y a la ejecución de proyectos de desarrollo social básico.

— Donaciones.

— Las modalidades previstas en los apartados a), c) y d) del artículo 8.

2. Recursos gestionados por el Ministerio de Economía y Hacienda, con cargo a los cuales se instrumentarán créditos concesionales en los términos internacionales vigentes en materia de crédito a la exportación con apoyo oficial.

En el caso de créditos destinados a programas y proyectos de desarrollo social básico y que estén específicamente destinados a mejorar las condiciones de vida de los sectores más necesitados de la población, los recursos se administrarán conjuntamente por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía y Hacienda, con arreglo a la normativa que se elaborará por este último de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

3. Estos recursos se aplicarán a programas y proyectos que se atengan a los principios, objetivos y prioridades que establece la presente Ley.»

Se rechazaron las enmiendas núms. 178 (GS), 257, 258, 259 y 260 (Sra. Rivadulla-GMx) y 373 y 374 (Sra. Almeida-GMx).

CAPÍTULO NUEVO

Se rechazó la enmienda 26 (GIU).

CAPÍTULO V

Se rechazaron las enmiendas 27 (GIU) y 179 (GS).

Artículo 25

Se rechazaron las enmiendas 180 (GS), 261 de la Sra. Rivadulla (GMx) y 375 de la Sra. Almeida (GMx) y en consecuencia el artículo 25 quedó redactado tal como figuraba en el proyecto.

Artículo 26

Se rechazaron las enmiendas 181 (GS), 96 (GCC), 262 de la Sra. Rivadulla (GMx) y 376 de la Sra. Almeida (GMx) y el texto del artículo quedó igual que en el proyecto.

Artículos 26 bis y ter (nuevos)

Se rechazaron igualmente las enmiendas 182 y 183 (GS).

CAPÍTULO VI

Como consecuencia de la aceptación de la enmienda 184 (GS), se modificó la rúbrica de este Capítulo que pasa

a denominarse: «La participación social en la Cooperación Internacional para el Desarrollo».

Artículo 27

La enmienda 317 (GP) se aprobó y en consecuencia también se consideraron aceptadas en parte las enmiendas 185 (GS) y 28 (GIU). Los representantes del Grupo Socialista en la Ponencia manifestaron expresamente que mantenían sus enmiendas. El texto que es aprobado es el siguiente:

CAPÍTULO VI

La participación social en la Cooperación Internacional para el Desarrollo

SECCIÓN PRIMERA

La Cooperación no gubernamental

«Artículo 27. Fomento de la Cooperación para el Desarrollo

El Estado fomentará las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y sus asociaciones para este fin, universidades, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y otros agentes sociales que actúen en el campo de la Cooperación para el Desarrollo, de acuerdo con la normativa vigente y la presente Ley, atendiendo a las prioridades definidas en los artículos 5 y 6.»

Artículo 28

Quedó redactado igual que en el Proyecto y en consecuencia no se aceptaron las enmiendas 82 (Sra. Lasagabaster-GMx), 341 (GC-CiU), 186 (GS), 97 (GCC), 263 de la Sra. Rivadulla (GMx), 377 de la Sra. Almeida (GMx), 29 (GIU) y 264 de la Sra. Rivadulla (GMx).

Artículo 29

Como consecuencia de la aceptación de las enmiendas 69 y 70 (GV-PNV) y en parte de las enmiendas 342 y 343 (GC-CiU) y del rechazo de las enmiendas 30 y 31 (GIU), 187 y 188 (GS), 265 y 266 de la Sra. Rivadulla (GMx), el texto del artículo 29 quedó redactado de la siguiente manera:

«Artículo 29. Registro de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo

1. Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo anterior deberán inscribirse en un Registro abierto

en la Agencia Española de Cooperación Internacional, que será regulado por vía reglamentaria o en los registros que con idéntica finalidad puedan crearse en las Comunidades Autónomas.

Se articularán los correspondientes procedimientos de colaboración entre la Agencia Española de Cooperación Internacional y las Comunidades Autónomas a fin de asegurar la comunicación de los datos registrales.

2. La inscripción en alguno de dichos Registros constituye una condición indispensable para recibir de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas o subvenciones computables como Ayuda Oficial al Desarrollo. Dicha inscripción será también necesaria para que las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo puedan acceder a los incentivos fiscales a que se refiere el artículo 31.

3. El Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo tiene carácter público, en los términos regulados por el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

Artículo 30

Como consecuencia de la aceptación en parte de las enmiendas 98 (GCC), 344 (GC-CiU), 378 y 379 Sra. Almeida (GMx), 267 y 269 de la Sra. Rivadulla (GMx) y 189 (GS) y de la no aceptación de las enmiendas 32 (GIU) y 268 de la Sra. Rivadulla (GMx), el texto del artículo quedó redactado de la siguiente manera:

«Artículo 30. Ayudas y subvenciones

Las Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán conceder ayudas y subvenciones públicas y establecer convenios estables y otras formas de colaboración, con los agentes sociales descritos en el artículo 27 para la ejecución de programas y proyectos de Cooperación para el Desarrollo, estableciendo las condiciones y régimen jurídico aplicables que garantizarán, en todo caso, el carácter no lucrativo de los mismos.»

Artículo 31

El texto aprobado es el resultado de la aceptación de las enmiendas 345, 346 y 347 (GC-CiU) y 71 (GV-PNV). Se rechazaron las enmiendas 33 (GIU), 190, 191, 192, 193 y 194 (GS), 270, 271, 272 y 273 de la Sra. Rivadulla (GMx), 380, 381 y 382 de la Sra. Almeida (GMx). El artículo quedó redactado de la siguiente manera:

«Artículo 31. Régimen fiscal de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y de las aportaciones efectuadas a las mismas

1. El régimen tributario de las entidades sin fines lucrativos regulado en el Capítulo I del Título II de la Ley

30/1994, de 24 de noviembre, resultará aplicable a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo inscritas en los Registros a que se refiere el artículo 29 de la presente Ley, siempre que revistan la forma jurídica y cumplan con los requisitos exigidos en el mismo.

2. La exención subjetiva prevista en el artículo 45.1.A.c) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, resultará de aplicación a las entidades contempladas en el mismo que realicen las actividades a que dicho precepto se refiere en el marco de la Cooperación al Desarrollo.

3. Las actividades de Cooperación para el Desarrollo enumeradas en el artículo 8 de la presente Ley tienen la consideración de actividades de asistencia social a efectos del disfrute de la exención prevista en el artículo 20, apartado uno, número 8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

4. Las aportaciones efectuadas por personas físicas y jurídicas a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo incluidas en el ámbito de la aplicación de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, darán derecho al disfrute de los incentivos contemplados en el Capítulo II del Título II de dicha Ley.

5. El régimen tributario aplicable a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, cuando no cumplan los requisitos exigidos en el Capítulo I del Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, será el establecido en el Capítulo XV de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

6. La presente regulación de incentivos fiscales se entiende sin perjuicio de la que puedan establecer otras Administraciones Públicas en virtud de la normativa vigente y sus competencias en la materia.»

Artículo 32

El artículo 32 quedó redactado igual que en el Proyecto. En consecuencia se rechazaron las enmiendas núms. 34 (GIU) y 195 (GS).

SECCIÓN SEGUNDA

Artículo 33

La aceptación parcial de las enmiendas núms. 350 y 352 (GC-CiU), 72 (GV-PNV) y 274 (Sra. Rivadulla Gracia-GMx) supuso la aprobación de un texto del artículo 33 que es el siguiente:

SECCIÓN SEGUNDA

El Voluntariado

«Artículo 33. El Voluntariado al servicio de la Cooperación para el Desarrollo.

1. En la gestión o ejecución de programas y proyectos de Cooperación para el Desarrollo a cargo de entidades públicas o privadas españolas, sin ánimo de lucro, podrán participar voluntarios que ejecuten sus actividades a través de las mismas.

2. Los voluntarios de Cooperación para el Desarrollo deberán ser informados, por la organización a la que estén vinculados, de los objetivos de su actuación, el marco en que se produce, sus derechos y deberes contractuales y legales en el extranjero, su derecho a la acreditación oportuna, así como su obligación de respetar las leyes del país de destino.

3. Los voluntarios de Cooperación para el Desarrollo estarán vinculados a la organización en la que presten sus servicios por medio de un contrato, no laboral, que contemple, como mínimo:

a) Una compensación económica en favor del voluntario que ayude a cubrir sus necesidades básicas en el país de destino.

b) Un seguro de asistencia en favor del voluntario y los familiares directos que con él se desplacen, que en todo caso cubra los riesgos de enfermedad y accidente durante el periodo de su estancia en el extranjero y gastos de repatriación.

c) Un periodo de formación, si fuera necesario.

4. Los voluntarios de Cooperación para el Desarrollo tendrán derecho a las exenciones fiscales, inmunidades y privilegios que se establecen en los acuerdos internacionales sobre la materia, suscritos por España.

5. En lo no previsto en el presente artículo, será de aplicación supletoria la Ley del Voluntariado, sin perjuicio de la aplicación de las normas autonómicas cuando corresponda, de acuerdo con las competencias de las Comunidades Autónomas en este ámbito.»

Quedaron rechazadas las enmiendas núms. 35, 36, 37, 38 y 39 (GIU), 196 (GS), 348, 349 y 351 (GC-CiU) y 383 (Sra. Almeida-GMx).

Artículo 33 bis (nuevo).

Tampoco aprobó la Ponencia la enmienda núm. 277 bis.

Artículo 34

La Ponencia consideró que el contenido del artículo 34 es innecesario toda vez que está regulado en las disposiciones legales correspondientes y por ello se acuerda su supresión.

No se aceptó la enmienda núm. 40 (IU) y por el contrario se consideraron aceptadas las enmiendas núms. 197 (GS) y 384 (Sra. Almeida Castro-GMx). En cuanto a la enmienda núm. 275 (Sra. Rivadulla Gracia-GMx) se consideró rechazada pues, aunque solicita la supresión, los motivos por lo que lo solicita son distintos.

Artículo 34 bis (nuevo)

Tampoco se aceptó la enmienda núm. 41 (GIU) que proponía un artículo 34 bis nuevo.

SECCIÓN SEGUNDA bis (nueva)

La aceptación de la enmienda núm. 353 (GC-CiU) dio lugar a la aprobación de una Sección Segunda bis (nueva) con la rúbrica «Los cooperantes expertos» y un artículo 34 bis nuevo cuya redacción es la siguiente:

SECCIÓN SEGUNDA bis (nueva)

Los Cooperantes Expertos

«Artículo 34 bis (nuevo)

1. Son cooperantes expertos quienes a una adecuada formación o titulación académica oficial, unen una probada experiencia profesional y tienen encomendada la ejecución de un determinado proyecto o programa en el marco de la cooperación para el desarrollo.

2. Se regulará el Estatuto de los Cooperantes Expertos en el que se fijarán, entre otros aspectos, sus derechos y obligaciones, régimen de incompatibilidades, formación, homologación de los servicios que prestan y modalidades de previsión social.»

Artículo 35

Como consecuencia de la aceptación de las enmiendas núms. 318 y 319 (GP) y la aceptación parcial de las enmiendas núms. 354 (GC-CiU), 385 (Sra. Almeida (GMx)) y 276 (Sra. Rivadulla (GMx)) se redactó el artículo 35 con el siguiente contenido:

SECCIÓN TERCERA

Fomento de la participación social en la cooperación para el desarrollo

«Artículo 35. Medidas para promover la participación de la sociedad española en la Cooperación para el Desarrollo.

Las Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y con cargo a sus presupuestos ordinarios, promoverán por sí mismas o en colaboración con los agentes sociales descritos en el artículo 27 de la presente Ley, el fomento del voluntariado y la participación de la sociedad española en las iniciativas a favor de los países en desarrollo, así como la conciencia de la solidaridad y cooperación activa con los mismos por vía de campañas de divulgación, servicios de información, pro-

gramas formativos y demás medios que se estimen apropiados para tal fin.»

La Ponencia optó por mantener este artículo 35 y el artículo 10 ter (nuevo) propuesto por la enmienda núm. 160 del Grupo Socialista con lo que quedaron aceptadas en parte las enmiendas núms. 160 y 198 del Grupo Socialista, si bien los representantes del Grupo Socialista manifestaron su deseo de mantener las enmiendas.

Se rechazó la enmienda núms. 42 del Grupo Izquierda Unida.

DISPOSICIONES ADICIONALESPrimera

Quedó redactada igual que en el texto del Proyecto rechazándose, en consecuencia, la enmienda 199 (GS).

Segunda

La Disposición Adicional Segunda quedó redactada igual que en el texto del Proyecto, rechazándose las enmiendas núms. 43 (GIU) y 200 (GS).

No se aceptó la propuesta de una Disposición Adicional Tercera (nueva) y, en consecuencia, se rechazaron las enmiendas núms. 44 (GIU), 277 (Sra. Rivadulla Gracia-GMx) y 386, 387 y 388 (Sra. Almeida Castro-GMx).

DISPOSICIONES TRANSITORIASPrimera

No sufrió modificaciones y, en consecuencia, se rechazaron las enmiendas núms. 45 (GIU), que propone una Disposición Transitoria Unica, y la 201 (GS).

Segunda

No sufrió modificación y se rechazó, en consecuencia, la enmienda núm. 202 (GS).

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

No sufrió modificación y se rechazaron, en consecuencia, las enmiendas núms. 46 (GIU), 99 (GCC) y 203 (GS).

DISPOSICIONES FINALESPrimera

No sufrió modificación, por lo que se rechazaron las enmiendas núms. 47 (GIU) y 100 (GCC).

Como consecuencia de la aceptación parcial de la enmienda núm. 355 (GC-CiU) se redactó una Disposición Final Primera bis (nueva) del siguiente tenor:

«Disposición Final Primera bis (nueva)

El Gobierno promoverá en el plazo de un año cuantas acciones y reformas legislativas sean precisas para la aprobación del Estatuto de los Cooperantes Expertos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 bis) de esta Ley.»

Segunda

La Disposición Final Segunda no sufrió modificación respecto de la redacción del Proyecto y en consecuencia se rechazó la enmienda núm. 101 (GCC). También se rechazó la enmienda núm. 204 (GS) que proponía una Disposición Final Segunda bis.

Título de la Ley

Se rechazaron las enmiendas núms. 1 (GIU) y 102 (GCC).

Todo el Proyecto

Resultaron rechazadas las enmiendas núms. 206 (Sra. Rivadulla Gracia-GMx), 239 (Sra. Rivadulla Gracia-GMx) y 356 (Sra. Almeida Castro-GMx). Como consecuencia de la nueva redacción del articulado se retiró la enmienda núm. 323 (GC-CiU) y es aceptada en parte también la núm. 321 (GC-CiU).

Exposición de Motivos

Se rechazaron las enmiendas núms. 2 (GIU), 104, 106, 107, 112, 113, 115 y 116 (GS).

Como consecuencia de la aceptación de la enmienda 103 (GS) se añadieron dos párrafos nuevos a continuación del primer párrafo de la Exposición de Motivos del Proyecto.

«La política española de Cooperación para el Desarrollo tiene básicamente su origen en la declaración contenida en el preámbulo de la Constitución de 1978, en la que la Nación española proclama su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

La política de Cooperación Internacional para el Desarrollo constituye un aspecto fundamental de la acción exterior de los Estados democráticos en relación con aquellos países que no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo, basada en una concepción interdependiente y solidaria de la sociedad internacional y de las relaciones que en ella se desarrollan.

A esta concepción de la interdependencia en las relaciones internacionales y de la necesidad de una política de

Cooperación Internacional para el Desarrollo, responde específicamente el mandato contenido en el Preámbulo de la Constitución española de contribuir en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.»

La aceptación parcial de las enmiendas núms. 321 y 322 (GC-CiU), 51, 52 y 53 (GV-PNV), 73 (Sra. Lasagabaster-GMx), 105, 108, 109, 110, 111 y 114 (GS), modificó la redacción de los párrafos 1, 2, 3 y 4 del epígrafe II de la Exposición de Motivos, que quedaron redactados de la siguiente manera:

«En los últimos años, la Cooperación española ha experimentado un desarrollo extraordinario en lo que al incremento de los recursos destinados a este fin se refiere y al impulso por parte de todas las Administraciones Públicas, Administración Central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, entre la sociedad civil de los valores de la Cooperación y solidaridad internacional a través de programas y proyectos de sensibilización y concienciación de los ciudadanos en relación con los problemas globales y particulares relacionados con la Cooperación al Desarrollo.

Sin embargo, el aumento de los fondos dedicados a cooperación, muestra de la solidaridad de España y en buena medida propiciado por la creciente sensibilización del conjunto de la sociedad, no debe ocultar las graves disfuncionalidades que en ocasiones ha venido padeciendo nuestro programa de ayuda.

La adopción de una Ley de Cooperación supone la oportunidad de articular en un único texto el conjunto de medidas e instrumentos que han ido configurando nuestra política de cooperación al desarrollo. Pero junto a este esfuerzo de integración normativa, de codificación, es preciso también revisar y actualizar el marco hoy existente a fin de responder de manera adecuada a una realidad cambiante. Lo mismo cabe decir de los principios y objetivos que inspiran nuestra política de cooperación al desarrollo, que precisan una definición acorde con los retos actuales del desarrollo. Al mismo tiempo, la Ley de Cooperación no puede eludir los problemas que presenta el marco actual: rigidez excesiva en los procedimientos administrativos, necesidad de una mayor transparencia, mecanismos de evaluación objetivables, etc.

El alto número de instituciones y entidades participantes en la política de cooperación, ha propiciado el desarrollo de un programa de ayuda desconcentrado y descentralizado y donde es preciso alcanzar la adecuada colaboración, complementariedad y coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas y los diferentes actores de la cooperación, capaz de asegurar y garantizar la mayor eficacia y coherencia del propio programa de ayuda.

Por otra parte el consenso básico que debe estar en la base de la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo sólo puede lograrse mediante la activa implicación en la misma de los diversos agentes sociales operativos con especial mención de las Organizaciones no Gubernamentales reconduciendo a un esquema eficaz y cohe-

rente los diversos esfuerzos a favor del desarrollo que realiza España.

Esta necesidad de aunar voluntades hace imprescindible dar entrada al Parlamento en la formulación de las líneas esenciales y en la definición de las prioridades estratégicas de esta política. Análogamente el órgano de Gobierno competente para coordinar la política de cooperación debe disponer de suficiente rango, medios y atribuciones para garantizar una mejor sintonía de todos los agentes administrativos actuantes en el logro de los objetivos fijados, para coordinar la presencia de España en los organismos internacionales relacionados con la ayuda al desarrollo y para elaborar con la participación de los diversos agentes implicados los criterios adecuados dirigidos al establecimiento de una política eficaz y coherente de desarrollo que se plasmarán en la planificación plurianual, que es presentada al Congreso de los Diputados tras su aprobación por el Gobierno.

A este respecto cabe afirmar que la planificación junto al seguimiento y evaluación de la cooperación requiere dotarse de instrumentos que permitan no sólo valorar la programación y asignación adecuada de los recursos y su debida gestión, sino la eficacia de los criterios adoptados. Sin embargo hasta ahora nuestro programa de ayuda ha adolecido de una incorrecta definición de sus principales objetivos y, como correlato necesario, de una evaluación sobre su impacto de resultados, su eficacia y eficiencia, hoy prácticamente inexistente. El principal mecanismo planificador, el Plan Anual de Cooperación Internacional, se ha limitado a servir como instrumento estadístico, centrado en la estimación cuantitativa de los recursos destinados a cooperación, más que como un auténtico plan válido para señalar con antelación los objetivos y resultados que esta política debe alcanzar. Resulta, por tanto, necesario establecer las bases para planificar, a medio y a corto plazo, nuestro programa de ayuda, incluyendo en la planificación a la variada gama de agentes que participan en la Cooperación para el Desarrollo española.

Junto a estos dos aspectos de la política de cooperación para el desarrollo hay otros dos aspectos que también demanda atención preferente y que la presente Ley contempla relativos a la definición de los objetivos y prioridades de la Cooperación Pública española, sus modalidades e instrumentos, uno de los cuales es la creación de nuevas modalidades crediticias gestionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el personal de cooperación, la definición de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, el reconocimiento del régimen fiscal especial aplicable a esas Organizaciones y a las aportaciones efectuadas a las mismas, así como un tratamiento presupuestario específico para la cooperación, en el que se contemple la posibilidad de adquirir compromisos de gastos de carácter plurianual en aquellos programas de cooperación que así lo requieran.»

La aceptación de las enmiendas núms. 278, 279, 280 y 281 (GP) modificó los párrafos 1 y 2 del epígrafe III de la Exposición de Motivos quedando redactados de la siguiente forma:

«La presente Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo se organiza en torno a seis ejes fundamentales,

que constituyen los seis Capítulos en que se integra su articulado. El Capítulo Primero, dedicado a la política española de Cooperación para el Desarrollo, consagra, en su Sección Primera, el régimen jurídico, definiéndose en el art. 1 el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación, y en la Sección Segunda se establecen los principios, objetivos y prioridades de la política española de Cooperación para el Desarrollo. El Capítulo Segundo se refiere a la planificación, e incluyendo los instrumentos y modalidades de la Cooperación Pública española, recoge entre aquéllos la cooperación técnica y la económica financiera y distingue entre éstas la canalizada por vía bilateral o multilateral.

Se dedica el Capítulo Tercero a la atribución de competencias de los órganos operativos en la definición, formulación y ejecución de la política española de Cooperación para el Desarrollo, recogiendo en la Sección Primera los órganos rectores (Congreso de los Diputados, Gobierno, Ministro de Asuntos Exteriores, otros Ministerios y Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica) y en la Sección Segunda, los órganos consultivos y de coordinación (Consejo de Cooperación para el Desarrollo, Comisión Interministerial de Cooperación Internacional y Comisión Interterritorial de Cooperación, instancia esta última creada por la propia Ley y que, al igual que los otros dos órganos y de acuerdo con lo señalado en el art. 17, será objeto posterior de desarrollo normativo). La Sección Tercera, consagrada a los órganos ejecutivos, se refiere a la Agencia Española de Cooperación Internacional, cuya organización, fines, funciones y competencias se regulan por su propia norma específica, y a las Oficinas Técnicas de Cooperación. En el Capítulo Cuarto se recogen los recursos materiales asignados a la ejecución de la política española de Cooperación, distinguiéndose entre los canalizados multilateral y bilateralmente. La Disposición Adicional incluye la posibilidad del establecimiento de programas presupuestarios plurianuales. El Capítulo Quinto se dedica al personal al servicio de la Administración del Estado en el ámbito de la Cooperación Oficial para el Desarrollo, distinguiéndose entre personal en territorio nacional y el destacado en el exterior.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 1998.—**Pablo Izquierdo Juárez, José María Robles Fraga, Teófilo de Luis Rodríguez, Rafael Estrella Pedrola, Francisco Fuentes Gallardo, José Navas Amores, Lluís Recoder i Miralles, Carlos Caballero Basáñez, Jesús Gómez Rodríguez, José Saura Laporta.**

A N E X O

PROYECTO DE LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

Exposición de Motivos

La política española de Cooperación para el Desarrollo tiene básicamente su origen en la declaración contenida en el preámbulo de la Constitución de 1978, en la que la Na-

ción española proclama su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

La política de Cooperación Internacional para el Desarrollo constituye un aspecto fundamental de la acción exterior de los Estados democráticos en relación con aquellos países que no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo, basada en una concepción interdependiente y solidaria de la sociedad internacional y de las relaciones que en ella se desarrollan.

A esta concepción de la interdependencia en las relaciones internacionales y de la necesidad de una política de Cooperación Internacional para el Desarrollo, responde específicamente el mandato contenido en el Preámbulo de la Constitución española de contribuir en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

La progresiva formulación y puesta en práctica de esta política hubo de tener en cuenta hechos relevantes, como son, entre otros, el ingreso de España en los distintos Bancos Regionales de Desarrollo (Banco Interamericano, Banco Africano y Banco Asiático), complementados por nuestra participación en todos aquellos organismos de carácter económico y financiero dedicados a la Cooperación para el Desarrollo, en particular los Fondos y Programas de la Unión Europea. Por otra parte, la creación por Real Decreto-Ley 16/1976 de 24 de agosto del Fondo de Ayuda al Desarrollo constituye un instrumento de la mayor importancia dentro de la cooperación bilateral de España con países menos desarrollados.

Con esta perspectiva, a la que se sumaban las actividades del Ministerio de Asuntos Exteriores en materia de Cooperación para el Desarrollo, tanto el Informe sobre la Cooperación Internacional en España elaborado por la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado como la subsiguiente Moción sobre Cooperación Internacional de España para el Desarrollo, aprobada por el Pleno de dicha Cámara en 1984, supusieron un punto de arranque, a partir del cual se abordó primeramente la tarea de definir la estructura orgánica de la Cooperación para el Desarrollo.

El Real Decreto 1485/1985, de 28 de agosto, por el que se estableció la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, creó la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, de la que pasaron a depender todos aquellos Centros directivos y Organismos Autónomos encargados de las relaciones culturales y económicas y de la cooperación científica y técnica. Posteriormente, el Real Decreto 451/1986, de 21 de febrero, creó la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional como órgano de apoyo a la coordinación de la Administración del Estado en la materia.

Con la finalidad de reconducir la dispersión de competencias que caracterizaba a nuestra Cooperación para el Desarrollo, mediante el Real Decreto 1527/1988, de 11 de noviembre, se creó la Agencia Española de Cooperación Internacional, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que se concentraron las competencias relativas a la cooperación bilateral con los países en vías de desarrollo, hasta entonces fragmentaria-

mente atribuidas a diversos órganos. Esta misma norma creó la Oficina de Planificación y Evaluación, unidad dependiente directamente del Secretario de Estado, encargada de la planificación y evaluación de nuestro programa de Ayuda al Desarrollo, en particular de la elaboración y supervisión de los Planes Anuales de Cooperación Internacional.

Más recientemente, se han operado una serie de cambios de diverso alcance en lo que a la estructura orgánica de la Cooperación para el Desarrollo se refiere. Así, mediante el Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo, se ha reestructurado la Agencia Española de Cooperación Internacional, completándose de esta forma la modificación ya realizada por el Real Decreto 2492/1994, de 23 de diciembre, que refundió los tres Institutos con rango de Dirección General en los dos actuales, el Instituto de Cooperación Iberoamericana y el Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo.

Por su parte, el Real Decreto 795/1995, de 19 de mayo, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, creó el Consejo de Cooperación para el Desarrollo, como órgano de participación de los diversos agentes sociales implicados en esta materia.

A la par que se definía su estructura orgánica, las Líneas Directrices de la Política Española para la Cooperación para el Desarrollo, aprobadas por el Consejo de Ministros en diciembre de 1987, establecieron por vez primera los principios rectores, objetivos, fines, medios e instrumentos de nuestra Cooperación Internacional para el Desarrollo. El ingreso de España en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, en diciembre de 1991, constituye un hito en la consolidación de nuestra Cooperación para el Desarrollo, en cuanto nos obliga a adaptarla y a coordinarla con la de los principales donantes del mundo, miembros del Comité.

Sin embargo, fue el Congreso de los Diputados, en su Informe sobre los Objetivos y Líneas Generales de la Política Española de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, aprobado por el Pleno de la Cámara en noviembre de 1992, el órgano impulsor que, además de marcar las pautas de la nueva política española de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, señaló la necesidad de aprobar un conjunto normativo adecuado al futuro modelo de Cooperación, y de adoptar una serie de medidas de organización administrativa que ayudasen a mejorar la coordinación interna de la Administración del Estado en este ámbito de actuación. En este mismo sentido se pronunció el Comité de Ayuda al Desarrollo con ocasión del examen del programa de ayuda español que realizó en abril de 1994, al sugerir, entre otros aspectos, la conveniencia de mayores avances en el desarrollo de la legislación apropiada, una coordinación más ajustada, una mejor capacidad para la planificación a largo plazo y una programación de la ayuda más centralizada.

Por último, el Senado, en el Informe de la Ponencia de estudio de la política española de Cooperación para el Desarrollo de noviembre de 1994, expresó de nuevo la recomendación de que se procediera a elaborar la legislación que supliera el vacío normativo existente y que abordase

los principales problemas de la Cooperación española para el Desarrollo.

II

Estado actual de la Cooperación

En los últimos años, la Cooperación española ha experimentado un desarrollo extraordinario en lo que al incremento de los recursos destinados a este fin se refiere y al impulso por parte de todas las Administraciones Públicas, Administración Central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, entre la sociedad civil de los valores de la Cooperación y solidaridad internacional a través de programas y proyectos de sensibilización y concienciación de los ciudadanos en relación con los problemas globales y particulares relacionados con la Cooperación al Desarrollo.

Sin embargo, el aumento de los fondos dedicados a cooperación, muestra de la solidaridad de España y en buena medida propiciado por la creciente sensibilización del conjunto de la sociedad, no debe ocultar las graves disfuncionalidades que en ocasiones ha venido padeciendo nuestro programa de ayuda.

La adopción de una Ley de Cooperación supone la oportunidad de articular en un único texto el conjunto de medidas e instrumentos que han ido configurando nuestra política de cooperación al desarrollo. Pero junto a este esfuerzo de integración normativa, de codificación, es preciso también revisar y actualizar el marco hoy existente a fin de responder de manera adecuada a una realidad cambiante. Lo mismo cabe decir de los principios y objetivos que inspiran nuestra política de cooperación al desarrollo, que precisan una definición acorde con los retos actuales del desarrollo. Al mismo tiempo, la Ley de Cooperación no puede eludir los problemas que presenta el marco actual: rigidez excesiva en los procedimientos administrativos, necesidad de una mayor transparencia, mecanismos de evaluación objetivables, etc.

El alto número de instituciones y entidades participantes en la política de cooperación, ha propiciado el desarrollo de un programa de ayuda desconcentrado y descentralizado y donde es preciso alcanzar la adecuada colaboración, complementariedad y coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas y los diferentes actores de la cooperación, capaz de asegurar y garantizar la mayor eficacia y coherencia del propio programa de ayuda.

Por otra parte el consenso básico que debe estar en la base de la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo sólo puede lograrse mediante la activa implicación en la misma de los diversos agentes sociales operativos con especial mención de las Organizaciones no Gubernamentales reconduciendo a un esquema eficaz y coherente los diversos esfuerzos a favor del desarrollo que realiza España.

Esta necesidad de aunar voluntades hace imprescindible dar entrada al Parlamento en la formulación de las líneas esenciales y en la definición de las prioridades estra-

tégicas de esta política. Análogamente el órgano de Gobierno competente para coordinar la política de cooperación debe disponer de suficiente rango, medios y atribuciones para garantizar una mejor sintonía de todos los agentes administrativos actuantes en el logro de los objetivos fijados, para coordinar la presencia de España en los organismos internacionales relacionados con la ayuda al desarrollo y para elaborar con la participación de los diversos agentes implicados los criterios adecuados dirigidos al establecimiento de una política eficaz y coherente de desarrollo que se plasmarán en la planificación plurianual, que es presentada al Congreso de los Diputados tras su aprobación por el Gobierno.

A este respecto cabe afirmar que la planificación junto al seguimiento y evaluación de la cooperación requiere dotarse de instrumentos que permitan no sólo valorar la programación y asignación adecuada de los recursos y su debida gestión, sino la eficacia de los criterios adoptados. Sin embargo hasta ahora nuestro programa de ayuda ha adolecido de una incorrecta definición de sus principales objetivos y, como correlato necesario, de una evaluación sobre su impacto de resultados, su eficacia y eficiencia, hoy prácticamente inexistente. El principal mecanismo planificador, el Plan Anual de Cooperación Internacional, se ha limitado a servir como instrumento estadístico, centrado en la estimación cuantitativa de los recursos destinados a cooperación, más que como un auténtico plan válido para señalar con antelación los objetivos y resultados que esta política debe alcanzar. Resulta, por tanto, necesario establecer las bases para planificar, a medio y a corto plazo, nuestro programa de ayuda, incluyendo en la planificación a la variada gama de agentes que participan en la Cooperación para el Desarrollo española.

Junto a estos dos aspectos de la política de cooperación para el desarrollo hay otros dos aspectos que también demanda atención preferente y que la presente Ley contempla relativos a la definición de los objetivos y prioridades de la Cooperación Pública española, sus modalidades e instrumentos, uno de los cuales es la creación de nuevas modalidades crediticias gestionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el personal de cooperación, la definición de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, el reconocimiento del régimen fiscal especial aplicable a esas Organizaciones y a las aportaciones efectuadas a las mismas, así como un tratamiento presupuestario específico para la cooperación, en el que se contemple la posibilidad de adquirir compromisos de gastos de carácter plurianual en aquellos programas de cooperación que así lo requieran.

III

Estructura de la Ley

La presente Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo se organiza en torno a seis ejes fundamentales, que constituyen los seis Capítulos en que se integra su articulado. El Capítulo Primero, dedicado a la política

española de Cooperación para el Desarrollo, consagra, en su Sección Primera, el régimen jurídico, definiéndose en el art. 1 el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación, y en la Sección Segunda se establecen los principios, objetivos y prioridades de la política española de Cooperación para el Desarrollo. El Capítulo Segundo se refiere a la planificación, e incluyendo los instrumentos y modalidades de la Cooperación Pública española, recoge entre aquéllos la cooperación técnica y la económica financiera y distingue entre éstas la canalizada por vía bilateral o multilateral.

Se dedica el Capítulo Tercero a la atribución de competencias de los órganos operativos en la definición, formulación y ejecución de la política española de Cooperación para el Desarrollo, recogiendo en la Sección Primera los órganos rectores (Congreso de los Diputados, Gobierno, Ministro de Asuntos Exteriores, otros Ministerios y Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica) y en la Sección Segunda, los órganos consultivos y de coordinación (Consejo de Cooperación para el Desarrollo, Comisión Interministerial de Cooperación Internacional y Comisión Interterritorial de Cooperación, instancia esta última creada por la propia Ley y que, al igual que los otros dos órganos y de acuerdo con lo señalado en el art. 17, será objeto posterior de desarrollo normativo). La Sección Tercera, consagrada a los órganos ejecutivos, se refiere a la Agencia Española de Cooperación Internacional, cuya organización, fines, funciones y competencias se regulan por su propia norma específica, y a las Oficinas Técnicas de Cooperación. En el Capítulo Cuarto se recogen los recursos materiales asignados a la ejecución de la política española de Cooperación, distinguiéndose entre los canalizados multilateral y bilateralmente. La Disposición Adicional incluye la posibilidad del establecimiento de programas presupuestarios plurianuales. El Capítulo Quinto se dedica al personal al servicio de la Administración del Estado en el ámbito de la Cooperación Oficial para el Desarrollo, distinguiéndose entre personal en territorio nacional y el destacado en el exterior.

Finalmente, en el Capítulo Sexto, la Ley aborda el contexto social de la Cooperación, dedicándose la Sección Primera a la Cooperación no gubernamental, incluyendo la formulación del principio de fomento estatal de la Cooperación no gubernamental, la definición de las organizaciones privadas de Cooperación para el Desarrollo y su Registro Público, los sistemas de ayudas y subvenciones, reglamentados a través de su propia normativa específica, y el establecimiento de incentivos fiscales.

Por lo que respecta a la regulación del régimen fiscal de las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y de los incentivos aplicables a las aportaciones efectuadas a las mismas, la Ley prevé que se les aplique el régimen contemplado en el Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en Actividades de Interés General, siempre que dichas organizaciones revistan la forma jurídica y cumplan con los requisitos exigidos por esa norma.

En el ámbito del Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre el Valor Añadido, se introducen dos preceptos específicos que dan entrada a la aplicación de determinadas exenciones a las actividades de Cooperación para el Desarrollo. Por lo que respecta a las aportaciones efectuadas por personas físicas y jurídicas a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, la Ley contempla la posibilidad de aplicar los incentivos previstos en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, siempre que esas aportaciones cumplan con las condiciones exigidas en dicha Ley y que se efectúen en favor de entidades incluidas en su ámbito de aplicación. Adicionalmente se prevé que las actividades de Cooperación al Desarrollo puedan ser incluidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año entre las actividades y programas prioritarios de mecenazgo, a efectos de la aplicación a las aportaciones que se efectúen a los mismos de incentivos fiscales incrementados.

La Sección Segunda se dedica al voluntariado al servicio de la Cooperación para el Desarrollo, incluyendo la prestación social sustitutoria, y la Tercera establece y regula, con carácter general, el fomento de la participación social en la Cooperación para el Desarrollo. La Ley se cierra con dos Disposiciones Adicionales, dos Transitorias, una Derogatoria y dos Finales.

CAPÍTULO I

La política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

SECCIÓN PRIMERA

Artículo 1. Objeto de la ley y ámbito de aplicación

1. La presente Ley tiene como objeto la regulación del régimen jurídico de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

A los efectos de esta Ley se entiende por política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo el conjunto de actividades que se traduce en transferencias de recursos públicos materiales y humanos que la Administración General del Estado por sí o en colaboración con entidades privadas destina a los países en vías de desarrollo directamente o a través de organizaciones multilaterales.

Asimismo establece los principios, objetivos y prioridades de la política de cooperación para el desarrollo del conjunto de administraciones públicas españolas, así como los sistemas de relación y colaboración entre dichas administraciones públicas.

Para que dichos recursos tengan la consideración de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), deberán cumplir los requisitos marcados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD).

2. Es Cooperación Internacional para el Desarrollo el conjunto de recursos y capacidades que España pone a disposición de los países en vías de desarrollo con el fin de facilitar a impulsar su progreso económico y social y para

contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo en todas sus manifestaciones.

3. La cooperación española impulsará procesos de desarrollo que atiendan a la defensa y protección de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social, la sostenibilidad y regeneración del medio ambiente, en los países que tienen elevados niveles de pobreza y en aquellos que se encuentran en transición hacia la plena consolidación de sus instituciones democráticas y su inserción en la economía internacional.

SECCIÓN SEGUNDA

Principios, objetivos y prioridades de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 2. Principios

La política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, inspirada en la Constitución, expresa la solidaridad del pueblo español con los países en desarrollo y particularmente con los pueblos más desfavorecidos de otras naciones y se basa en un amplio consenso político y social a escala nacional, de acuerdo con los siguientes principios:

a) El reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y colectiva, como protagonista y destinatario último de la política de Cooperación para el Desarrollo.

b) La defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la participación ciudadana en condiciones de igualdad para mujeres y hombres y en general la no discriminación por razón de sexo, raza, cultura o religión y el respeto a la diversidad.

c) La necesidad de promover un desarrollo humano global, interdependiente, participativo, sostenible y con equidad de género en todas las naciones, procurando la aplicación del principio de corresponsabilidad entre los Estados, en orden a asegurar y potenciar la eficacia y coherencia de las políticas de Cooperación al Desarrollo en su objetivo de erradicación de la pobreza en el mundo.

d) La promoción de un crecimiento económico duradero y sostenible de los países acompañada de medidas que promuevan una redistribución equitativa de la riqueza para favorecer la mejora de las condiciones de vida y el acceso a los servicios sanitarios, educativos y culturales así como el bienestar de sus poblaciones.

e) El respeto a los compromisos adoptados en el seno de los Organismos Internacionales.

Artículo 3. Objetivos

La política de Cooperación Internacional para el Desarrollo es parte de la política exterior que dirige el Go-

bierno. Su ejecución se integra en la acción exterior del Estado con observancia del principio de unidad de la misma.

El principio de unidad de acción del Estado en el exterior se aplicará conforme a la normativa vigente y en el marco de las competencias de las distintas administraciones públicas.

La política de Cooperación Internacional para el Desarrollo determinará estrategias y acciones dirigidas a la promoción del desarrollo sostenible humano, social y económico para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo a través de los siguientes objetivos:

a) Fomentar con recursos humanos y materiales el desarrollo de los países más desfavorecidos para que puedan alcanzar un crecimiento económico con un reparto más equitativo de los frutos del desarrollo, favoreciendo las condiciones para el logro de un desarrollo autosostenido a partir de las propias capacidades de los beneficiarios, propiciando una mejora en el nivel de vida de las poblaciones beneficiarias en general y de sus capas más necesitadas en particular, y promoviendo mayores garantías de estabilidad y participación democrática en el marco del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres y hombres.

b) Contribuir a un mayor equilibrio en las relaciones políticas, estratégicas, económicas y comerciales, promoviendo así un marco de estabilidad y seguridad que garantice la paz internacional.

c) Prevenir y atender situaciones de emergencia mediante la prestación de acciones de ayuda humanitaria.

c) bis. Favorecer la instauración y consolidación de los regímenes democráticos y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

d) Impulsar las relaciones políticas, económicas y culturales con los países en vías de desarrollo.

Artículo 3 bis

Los principios y objetivos señalados en los artículos anteriores informarán todas las políticas que apliquen las Administraciones Públicas en el marco de sus respectivas competencias y que puedan afectar a los países en vías de desarrollo.

Artículo 4. Prioridades

La política española de Cooperación para el Desarrollo, como reflejo de la diversidad de situaciones sobre las que opera y del diferente grado de urgencia para acometer las acciones de intervención concretas, se articula en torno a dos ejes de prioridades que determinarán sus líneas de actuación preferente:

a) Geográficas, orientadas a las regiones y países que serán objeto preferente de la Cooperación española.

b) Sectoriales, dirigidas a determinados ámbitos de actuación preferente.

La definición de estas prioridades, que serán establecidas periódicamente en los sucesivos Planes Directores cuatrienales a que se refiere el artículo 7, responderá a los objetivos de la política exterior del Estado, tendrá en cuenta las consideraciones señaladas en el artículo anterior, y aplicará especial atención a la Cooperación con los países de menor desarrollo económico y social y dentro de éstos a los sectores más desfavorecidos.

Artículo 5. Prioridades geográficas

1. Marco bilateral.

Sin perjuicio del establecimiento de otras áreas territoriales según lo establecido en el artículo 4 se considerarán como áreas geográficas de actuación preferente a los países de Iberoamérica, los países árabes del Norte de África y de Oriente Medio, así como aquellos otros de menor desarrollo con los que España mantenga especiales vínculos de carácter histórico o cultural.

2. Marco multilateral.

España impulsará la coherencia de las políticas comunitarias, la progresiva construcción de la política de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea y contribuirá a su eficaz aplicación y ejecución, con especial atención a los países y áreas mencionadas en el apartado anterior.

Por otra parte, España participará activamente en los Organismos Internacionales de Cooperación para el Desarrollo de los que sea miembro, tanto financieros como no financieros y colaborará en la consecución de sus objetivos adoptando las medidas que resulten más adecuadas.

Artículo 6. Prioridades Sectoriales

La política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su objetivo de luchar contra la pobreza en todas sus manifestaciones, se orientará especialmente a las siguientes prioridades sectoriales:

a) Servicios sociales básicos, con especial incidencia en salud, saneamiento, educación y formación de recursos humanos.

a) bis. Satisfacción de las necesidades básicas, obtención de la seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza.

a) ter. Mejora de los servicios de salud y de saneamiento básico.

a) quater. Apoyo a la educación y a la formación de recursos humanos.

b) Dotación, mejoramiento o ampliación de infraestructuras. Desarrollo de la base productiva y fomento del sector privado.

c) Protección de los derechos humanos, participación e integración social de la mujer, defensa de los grupos de

población más vulnerables (menores, refugiados, desplazados, retornados, indígenas).

c) bis. Respeto de los derechos humanos, apoyo a las estructuras democráticas y de la sociedad civil y fortalecimiento de la capacidad de las Instituciones, especialmente las más próximas al ciudadano, para atender las necesidades de la población.

c) ter. Potenciación de la participación de la mujer en los procesos de desarrollo e igualdad de oportunidades.

c) quater. Respeto a la interculturalidad e igualdad de oportunidades de las minorías étnicas.

d) Fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la sociedad civil.

e) Protección y mejora de la calidad del Medio Ambiente, conservación racional y utilización renovable y sostenible de los recursos naturales.

f) Cultura, con especial incidencia en la defensa de los aspectos que definan la identidad cultural dirigida al desarrollo endógeno y los que favorezcan la promoción cultural y el libre acceso a equipamientos y servicios culturales de todos los sectores de la población potencialmente beneficiaria.

f) bis. Desarrollo de la investigación científica y tecnológica, y su aplicación a los proyectos de Cooperación para el Desarrollo.

CAPÍTULO II

Planificación, instrumentos y modalidades de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 7. Planificación

1. La política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo se establecerá a través de Planes Directores y Planes Anuales.

2. El Plan Director, elemento básico de la planificación de la Política Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se formulará cuatrienalmente y contendrá las líneas generales y directrices básicas de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo señalando los objetivos y prioridades, así como los recursos presupuestarios indicativos que orientarán la actuación de la cooperación española a medio plazo.

3. Los Planes Anuales desarrollarán con esa periodicidad los objetivos, prioridades y recursos establecidos en el Plan Director.

Artículo 8. Instrumentos

La política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo se pone en práctica a través de los siguientes instrumentos:

a) Cooperación técnica.

b) Cooperación económica y financiera.

c) Ayuda humanitaria, tanto alimentaria como de emergencia, incluyendo operaciones de mantenimiento de la paz, instrumentada por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales.

d) Educación para el desarrollo y sensibilización social.

Artículo 9. Cooperación Técnica

La cooperación técnica para el desarrollo incluye cualquier modalidad de asistencia dirigida a la formación de recursos humanos del país receptor, mejorando sus niveles de instrucción, adiestramiento, cualificación y capacidades técnicas y productivas en los ámbitos institucional, administrativo, económico, sanitario, social, cultural, educativo, científico o tecnológico.

La Cooperación técnica se articulan mediante programas y proyectos de refuerzo de la formación de cuadros en todos los sectores y niveles, y mediante programas y proyectos de asesoramiento técnico con asistencia de expertos, agentes sociales, Organizaciones No Gubernamentales, empresas españolas, aportación de estudios o transferencia de tecnologías.

Artículo 10. Cooperación Económica y Financiera

La cooperación económica se expresa a través de aportaciones destinadas a proyectos de inversión para el aumento del capital físico de los países beneficiarios y a proyectos de ayuda a los sectores económicos (agroalimentario, educativo, sanitario, infraestructuras, transporte y otros).

La cooperación financiera se manifiesta a través de contribuciones oficiales a organismos internacionales de carácter económico y financiero, acuerdos financieros de alivio o condonación de deuda suscritos por vía bilateral o multilateral, donaciones, préstamos o ayudas instrumentadas para que los países receptores puedan afrontar dificultades coyunturales de ajuste en sus Balanzas de Pagos, y otros establecidos en términos concesionales con cargo a que se refiere el art. 24, así como dotaciones a los ya existentes fondos de Ayuda al Equipamiento, gestionados directamente por la Agencia Española de Cooperación Internacional con cargo a su propio presupuesto.

Artículo 10 bis (nuevo). Ayuda humanitaria

La ayuda humanitaria consiste en el envío urgente, con carácter no discriminado, del material de socorro necesario, incluida la ayuda alimentaria de emergencia, para proteger vidas humanas y aliviar la situación de las poblaciones víctimas de catástrofe natural o causadas por el hombre o que padecen una situación de conflicto bélico. Esta ayuda la llevan a cabo las Administraciones Públicas directamente o a través de Organizaciones No Gubernamentales y Organismos Internacionales.

La ayuda humanitaria podrá dar paso a actividades de rehabilitación, de reconstrucción de infraestructuras, restablecimiento institucional o de reinserción de poblaciones afectadas, debiendo promoverse la mayor coordinación posible entre las entidades que colaboren y respecto de las instituciones u organizaciones locales, a fin de tener en cuenta los objetivos del Desarrollo a medio y largo plazo.

La Cooperación española promoverá el respeto al derecho humanitario y asimismo apoyará en este ámbito medidas para la prevención y resolución de conflictos, incluyendo las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz, instrumentadas por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales.

Artículo 10 ter (nuevo). Educación para el desarrollo y sensibilización social

Se entiende por educación para el desarrollo y sensibilización social el conjunto de acciones que desarrollan las Administraciones Públicas, directamente o en colaboración con las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, para promover actividades que favorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia los problemas que afectan a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad y cooperación activas con los mismos, por la vía de campañas de divulgación, servicios de información, programas formativos, apoyo a las iniciativas en favor de un Comercio justo y Consumo responsable respecto de los productos procedentes de los países en desarrollo.

Artículo 11. Modalidades

1. Los programas, proyectos y acciones de cooperación para el desarrollo pueden financiarse y ejecutarse de forma bilateral o multilateral.

2. La cooperación bilateral consiste en el conjunto de actividades de cooperación para el desarrollo realizadas por las Administraciones públicas directamente con el país receptor o bien las instrumentadas a través de organizaciones de desarrollo desprovistas de carácter oficial.

3. La cooperación multilateral es la realizada a través de transacciones de cualquier tipo o las contribuciones realizadas a organizaciones internacionales cuyas actividades se dirijan total o parcialmente a la promoción del bienestar económico y social de las poblaciones de los países en vías de desarrollo.

El carácter multilateral de dichas organizaciones se determinará a través de la aplicación de los siguientes criterios:

a) Que se trate de una Agencia, institución u organización cuyos miembros son Gobiernos.

b) Que sea un fondo gestionado de forma autónoma por uno de los órganos multilaterales comprendidos en el apartado a).

CAPÍTULO III

Órganos competentes en la formulación y ejecución de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

SECCIÓN PRIMERA

Órganos rectores

Artículo 12. El Congreso de los Diputados

1. Al Congreso de los Diputados corresponde establecer cada cuatro años en la forma y modo que se determine y a propuesta e iniciativa del Gobierno, las líneas generales y directrices básicas de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. A tal efecto, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados, posteriormente a su aprobación, el Plan Director Plurianual al que se refiere el artículo 7 para su debate y dictamen.

2. El Congreso de los Diputados debatirá anualmente, en la forma y modo que se determine y a propuesta e iniciativa del Gobierno, la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. A tal efecto, el Gobierno remitirá a la Cámara, posteriormente a su aprobación, el Plan Anual al que se refiere el artículo 7 para su debate y dictamen.

3. Se constituirá una Comisión Parlamentaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Congreso de los Diputados, de conformidad con lo que disponga el Reglamento de la Cámara. Esta Comisión será informada por el Gobierno del nivel de ejecución y grado de cumplimiento de los programas, proyectos y acciones comprendidos en el Plan Director y el Plan Anual, y recibirá cuenta de la evaluación de la cooperación, así como de los resultados que refleje el Documento de Seguimiento del Plan Anual del ejercicio precedente.

Artículo 13. El Gobierno

El Gobierno define y dirige la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, el Gobierno aprueba el Plan Director y el Plan Anual.

Artículo 14. El Ministro de Asuntos Exteriores

Sin perjuicio de las competencias que los diferentes Departamentos ministeriales puedan tener en materia de Cooperación para el Desarrollo, el Ministro de Asuntos Exteriores, como responsable de la ejecución de la política exterior del Estado, lo es también de la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la coordinación de los órganos de la Administración General del Estado que tengan legalmente atribuidas competencias en esta materia.

Artículo 15. Otros Ministerios

Los Ministerios que realicen actividades en materias de Cooperación Internacional para el Desarrollo serán responsables de la ejecución de los programas, proyectos y acciones dentro del ámbito de sus competencias, que serán coordinadas a través de los órganos establecidos al efecto en esta Ley, con observancia del principio de la unidad de acción del Estado en el exterior.

Artículo 16. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SE-CIPI).

1. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica es el órgano del Ministerio de Asuntos Exteriores que, por delegación de su titular, coordina la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo, administra los recursos a que se refiere el art. 24.2.1, asegura la participación española en las organizaciones internacionales de Ayuda al Desarrollo y define la posición de España en la formulación de la política comunitaria de Desarrollo.

2. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, como órgano superior del Ministerio de Asuntos Exteriores, asiste al titular del Departamento en la formulación y ejecución de la política de Cooperación para el Desarrollo y asume la programación, dirección, seguimiento y control de las actividades consiguientes.

3. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, previo dictamen del Consejo de Cooperación al Desarrollo y de la Comisión Interterritorial de Cooperación, formula la propuesta del Plan Director y del Plan Anual, así como la definición de las prioridades territoriales y sectoriales a que se refiere el art. 4.

4. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica en el marco de sus competencias evaluará la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los programas y proyectos financiados con fondos del Estado en curso de ejecución y los finalizados, desde su concepción y definición hasta sus resultados. La evaluación tendrá en cuenta la pertinencia de los objetivos y su grado de consecución, así como la eficiencia y eficacia alcanzadas, el impacto logrado y la viabilidad comprobada en los programas y proyectos ya finalizados.

SECCIÓN SEGUNDA (nueva)

Comunidades Autónomas y Entidades Locales

Artículo 16 bis. Cooperación para el Desarrollo de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

1. La Cooperación para el Desarrollo que se realice desde las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

les, expresión solidaria de sus respectivas sociedades, se inspira en los principios, objetivos y prioridades establecidos en la Sección Segunda del Capítulo I de la presente Ley.

2. La acción de dichas Entidades en la Cooperación para el Desarrollo se basa en los principios de autonomía presupuestaria y autoresponsabilidad en su desarrollo y ejecución, debiendo respetar las líneas generales y directrices básicas establecidas por el Congreso de los Diputados a que se refiere el artículo 12.1 de la presente Ley y el principio de colaboración entre Administraciones Públicas en cuanto al acceso y participación de la información y máximo aprovechamiento de los recursos públicos.

SECCIÓN SEGUNDA (SECCIÓN TERCERA NUEVA)

Órganos consultivos y de coordinación

Artículo 17. Organos consultivos y de coordinación de Cooperación para el Desarrollo

Los órganos consultivos y de coordinación de Cooperación para el Desarrollo:

- a) El Consejo de Cooperación al Desarrollo.
- b) La Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo.
- c) La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.

Su composición, competencias, organización y funciones se establecen por las correspondientes normas de desarrollo reglamentario.

Artículo 18. El Consejo de Cooperación al Desarrollo

1. El Consejo de Cooperación al Desarrollo es el órgano consultivo de la Administración General del Estado para la definición de la política de Cooperación para el Desarrollo.

2. En el Consejo de Cooperación al Desarrollo, además de la Administración, participarán los agentes sociales, expertos, organizaciones no gubernamentales especializadas e instituciones y organismos de carácter privado presentes en el campo de la Ayuda al Desarrollo.

3. El Consejo de Cooperación al Desarrollo informará la propuesta del Plan Director del Plan Anual y conocerá los resultados del Documento de Seguimiento del Plan Anual y de la Evaluación de la Cooperación.

4. Se someterán a informe previo del Consejo los anteproyectos de ley y cualquiera otras disposiciones generales de la Administración del Estado que regulen materias concernientes a la Cooperación para el Desarrollo. De las conclusiones de estos informes se dará conocimiento a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados.

5. El Consejo de Cooperación al Desarrollo será dotado con los recursos necesarios para poder cumplir sus objetivos.

Artículo 19. La Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo

1. La Comisión Interterritorial de Cooperación es el órgano de coordinación, concertación y coordinación entre las Administraciones Públicas que ejecuten gastos computables como Ayuda Oficial al Desarrollo.

2. Las funciones de la Comisión se dirigirán a promover los siguientes objetivos:

a) La coherencia y complementariedad de las actividades que realicen las Administraciones Públicas en el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo.

b) El mayor grado de eficacia y eficiencia en la identificación, formulación y ejecución de programas y proyectos de Cooperación al Desarrollo impulsados por las distintas Administraciones Públicas, plenamente autónomas a esos efectos, en el marco de sus respectivas competencias.

c) La participación de las Administraciones Públicas en la formación del Plan Director y del Plan Anual, así como en la definición de sus prioridades.

3. Se someterán a informe previo de la Comisión los anteproyectos de ley y cualesquiera otras disposiciones generales que regulen materias concernientes a la Cooperación al Desarrollo.

4. Reglamentariamente se regulará su composición y funcionamiento, garantizándose la presencia e intervención de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales o de aquellas instancias de coordinación supramunicipal en quién estos expresamente deleguen.

Artículo 20. La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.

1. La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional es el órgano de coordinación técnica interdepartamental de la Administración General del Estado en materia de Cooperación para el Desarrollo.

2. La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional someterá a la aprobación del Gobierno a través del Ministro de Asuntos Exteriores las propuestas del Plan Director y Plan Anual y conocerá los resultados del Documento de Seguimiento del Plan Anual y de la Evaluación de la Cooperación.

SECCIÓN TERCERA

Órganos ejecutivos

Artículo 21. La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

1. La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Secretaría de Estado

para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, y presidido por su titular, es el órgano de gestión de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros departamentos ministeriales.

2. En cuanto a su organización, fines, funciones y competencias se estará a lo que disponga su Estatuto, que será aprobado por el Gobierno, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Artículo 22. Las Oficinas Técnicas de Cooperación

Las Oficinas Técnicas de Cooperación son unidades adscritas orgánicamente a las Embajadas que, bajo la dirección de su Jefe de Misión y la dependencia funcional de la Agencia Española de Cooperación Internacional, aseguran la coordinación y, en su caso, la ejecución de los recursos de la cooperación en su demarcación. Asimismo, colaborarán con los programas y proyectos impulsados por las demás Administraciones Públicas.

CAPÍTULO IV

Recursos materiales

SECCIÓN ÚNICA

Modalidades de Financiación y Ejecución de la Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 23. Colaboración y cofinanciación de programas con Organismos Internacionales

1. El Gobierno, a fin de coadyuvar al desarrollo de los países menos favorecidos a través de organizaciones internacionales, fomentará la participación de los agentes de cooperación en los programas y proyectos gestionados por esas instancias multilaterales, especialmente los de la Unión Europea.

2. España participará en la cooperación multilateral para el desarrollo a través de las siguientes modalidades:

- a) Contribuciones a organizaciones internacionales de carácter financiero y no financiero.
- b) Aportaciones españolas a los programas de Cooperación de la Unión Europea.
- c) Otros programas que se ejecuten en colaboración o en régimen de cofinanciación con Organismos Internacionales.

Artículo 24. Financiación y ejecución bilateral

La cooperación bilateral para el Desarrollo se financia según las siguientes modalidades:

1. Recursos gestionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, vinculados a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo social básico de las poblaciones beneficiarias, con cargo a los cuales se instrumentarán:

— Dotaciones presupuestarias dirigidas a la concesión de microcréditos y de créditos rotatorios destinados a la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables y a la ejecución de proyectos de desarrollo social básico.

— Donaciones.

— Las modalidades previstas en los apartados a), c) y d) del artículo 8.

2. Recursos gestionados por el Ministerio de Economía y Hacienda, con cargo a los cuales se instrumentarán créditos concesionales en los términos internacionales vigentes en materia de crédito a la exportación con apoyo oficial.

En el caso de créditos destinados a programas y proyectos de desarrollo social básico y que estén específicamente destinados a mejorar las condiciones de vida de los sectores más necesitados de la población, los recursos se administrarán conjuntamente por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía y Hacienda, con arreglo a la normativa que se elaborará por este último de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

3. Estos recursos se aplicarán a programas y proyectos que se atengan a los principios, objetivos y prioridades que establece la presente Ley.

CAPÍTULO V

Personal al servicio de la Administración General del Estado en el ámbito de la Cooperación Oficial para el Desarrollo

Artículo 25. Personal en territorio nacional

Las actividades de la Administración General del Estado realizadas en España en el campo de la Cooperación para el Desarrollo serán ejecutadas por personal funcionario en situación de servicio activo, conforme a lo previsto en la Ley 30/84 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y por personal laboral de la Administración del Estado, de acuerdo a lo regulado en su normativa específica y sin perjuicio de la participación de objetores de conciencia y de personal voluntario, en los términos que establece la Ley 6/1996 de 15 de enero del Voluntariado.

Artículo 26. Personal en el exterior

1. La Administración del Estado dispondrá de personal destacado en servicios en el exterior encargado de la realización de funciones en materia de Cooperación Oficial para el Desarrollo.

2. Los puestos directivos podrán ser desempeñados por personal contratado bajo una relación de carácter especial de las previstas en el artículo 2.1. a) del Estatuto de los Trabajadores. A este personal se le exigirá, en todo caso, estar en posesión de titulación universitaria y los demás requisitos que establezca la correspondiente convocatoria pública. Cuando tales puestos sean ocupados por funcionarios, éstos pasarán a la situación administrativa que prevé su estatuto.

3. El personal no directivo de la Cooperación Oficial para el Desarrollo podrá ser contratado en los países donde se realice dicha Cooperación, de acuerdo con el régimen jurídico local.

4. Asimismo, en la Cooperación Oficial para el Desarrollo podrá prestar servicios personal desplazado desde España por tiempo determinado, que se registrará por el Estatuto de los Trabajadores, en el caso de que se trate de personal laboral, o quedará en la situación administrativa que corresponda si se trata de personal funcionario.

5. La Administración del Estado, con la finalidad de favorecer la estabilidad del personal de Cooperación, establecerá reglamentariamente las condiciones y plazos aplicables en relación con el desempeño de los puestos de trabajo de la Cooperación del Estado en el exterior.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no excluye la participación de objetores de conciencia y personal voluntario en los programas y proyectos de Cooperación para el Desarrollo financiados por la Administración del Estado.

CAPÍTULO VI

La participación social en la Cooperación Internacional para el Desarrollo

SECCIÓN PRIMERA

La Cooperación no gubernamental

Artículo 27. Fomento de la Cooperación para el Desarrollo

El Estado fomentará las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y sus asociaciones para este fin, universidades, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y otros agentes sociales que actúen en el campo de la Cooperación para el Desarrollo, de acuerdo con la normativa vigente y la presente Ley, atendiendo a las prioridades definidas en los artículos 5 y 6.

Artículo 28. Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo

A los efectos de la presente Ley se consideran Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo aquellas entidades de Derecho privado, legalmente constituidas y sin fines de lucro, que tengan por objeto expreso según sus

propios estatutos la realización de actividades relacionadas con la Cooperación para el Desarrollo o que gocen de reconocido prestigio y tradición histórica en ese campo.

Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo habrán de gozar de plena capacidad jurídica y de obrar, y deberán disponer de una estructura susceptible de garantizar suficientemente el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 29. Registro de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo

1. Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo anterior deberán inscribirse en un Registro abierto en la Agencia Española de Cooperación Internacional, que será regulado por vía reglamentaria o en los registros que con idéntica finalidad puedan crearse en las Comunidades Autónomas.

Se articularán los correspondientes procedimientos de colaboración entre la Agencia Española de Cooperación Internacional y las Comunidades Autónomas a fin de asegurar la comunicación de los datos registrales.

2. La inscripción en alguno de dichos Registros constituye una condición indispensable para recibir de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas o subvenciones computables como Ayuda Oficial al Desarrollo. Dicha inscripción será también necesaria para que las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo puedan acceder a los incentivos fiscales a que se refiere el artículo 31.

3. El Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo tiene carácter público, en los términos regulados por el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 30. Ayudas y subvenciones

Las Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán conceder ayudas y subvenciones públicas y establecer convenios estables y otras formas de colaboración, con los agentes sociales descritos en el artículo 27 para la ejecución de programas y proyectos de Cooperación para el Desarrollo, estableciendo las condiciones y régimen jurídico aplicables que garantizarán, en todo caso, el carácter no lucrativo de los mismos.

Artículo 31. Régimen fiscal de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y de las aportaciones efectuadas a las mismas

1. El régimen tributario de las entidades sin fines lucrativos regulado en el Capítulo I del Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, resultará aplicable a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo inscritas

en los Registros a que se refiere el artículo 29 de la presente Ley, siempre que revistan la forma jurídica y cumplan con los requisitos exigidos en el mismo.

2. La exención subjetiva prevista en el artículo 45.1.A.c) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, resultará de aplicación a las entidades contempladas en el mismo que realicen las actividades a que dicho precepto se refiere en el marco de la Cooperación al Desarrollo.

3. Las actividades de Cooperación para el Desarrollo enumeradas en el artículo 8 de la presente Ley tienen la consideración de actividades de asistencia social a efectos del disfrute de la exención prevista en el artículo 20, apartado uno, número 8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

4. Las aportaciones efectuadas por personas físicas y jurídicas a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo incluidas en el ámbito de la aplicación de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, darán derecho al disfrute de los incentivos contemplados en el Capítulo II del Título II de dicha Ley.

5. El régimen tributario aplicable a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, cuando no cumplan los requisitos exigidos en el Capítulo I del Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, será el establecido en el Capítulo XV de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

6. La presente regulación de incentivos fiscales se entiende sin perjuicio de la que puedan establecer otras Administraciones Públicas en virtud de la normativa vigente y sus competencias en la materia.

Artículo 32. Incremento a los incentivos fiscales en las Leyes de Presupuestos

Las Leyes de Presupuestos del Estado de cada año podrán incluir entre las actividades y programas prioritarios de mecenazgo a que se refiere el artículo 67 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, determinadas actividades o programas realizados en el marco de la Cooperación para el Desarrollo, a efectos de la aplicación de los incentivos fiscales incrementados que dicho precepto contempla.

SECCIÓN SEGUNDA

El Voluntariado

Artículo 33. El Voluntariado al servicio de la Cooperación para el Desarrollo

1. En la gestión o ejecución de programas y proyectos de Cooperación para el Desarrollo a cargo de entidades públicas o privadas españolas, sin ánimo de lucro, podrán participar voluntarios que ejecuten sus actividades a través de las mismas.

2. Los voluntarios de Cooperación para el Desarrollo deberán ser informados, por la organización a la que estén vinculados, de los objetivos de su actuación, el marco en que se produce, sus derechos y deberes contractuales y legales en el extranjero, su derecho a la acreditación oportuna, así como su obligación de respetar las leyes del país de destino.

3. Los voluntarios de Cooperación para el Desarrollo estarán vinculados a la organización en la que presten sus servicios por medio de un contrato, no laboral, que contemple, como mínimo:

a) Una compensación económica en favor del voluntario que ayude a cubrir sus necesidades básicas en el país de destino.

b) Un seguro de asistencia en favor del voluntario y los familiares directos que con él se desplacen, que en todo caso cubra los riesgos de enfermedad y accidente durante el periodo de su estancia en el extranjero y gastos de repatriación.

c) Un periodo de formación, si fuera necesario.

4. Los voluntarios de Cooperación para el Desarrollo tendrán derecho a las exenciones fiscales, inmunidades y privilegios que se establecen en los acuerdos internacionales sobre la materia, suscritos por España.

5. En lo no previsto en el presente artículo, será de aplicación supletoria la Ley del Voluntariado, sin perjuicio de la aplicación de las normas autonómicas cuando corresponda, de acuerdo con las competencias de las Comunidades Autónomas en este ámbito.

SECCIÓN SEGUNDA bis (nueva)

Los Cooperantes Expertos

Artículo 34 bis (nuevo)

1. Son cooperantes expertos quienes a una adecuada formación o titulación académica oficial, unen una probada experiencia profesional y tienen encomendada la ejecución de un determinado proyecto o programa en el marco de la cooperación para el desarrollo.

2. Se regulará el Estatuto de los Cooperantes Expertos en el que se fijarán, entre otros aspectos, sus derechos y obligaciones, régimen de incompatibilidades, formación, homologación de los servicios que prestan y modalidades de previsión social.

SECCIÓN TERCERA

Fomento de la participación social en la cooperación para el desarrollo

Artículo 35. Medidas para promover la participación de la sociedad española en la Cooperación para el Desarrollo

Las Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y con cargo a sus presupuestos ordinarios, promoverán por sí mismas o en colaboración con los agentes sociales descritos en el artículo 27 de la presente Ley, el fomento del voluntariado y la participación de la sociedad española en las iniciativas a favor de los países en desarrollo, así como la conciencia de la solidaridad y cooperación activa con los mismos por vía de campañas de divulgación, servicios de información, programas formativos y demás medios que se estimen apropiados para tal fin.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Programas Presupuestarios Plurianuales

De acuerdo con lo establecido en el art. 61.2 de la Ley 1091/88 General Presupuestaria, de 23 de septiembre, podrán también adquirirse compromisos de gastos para financiar programas y proyectos de Cooperación para el Desarrollo que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio.

Segunda. Modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido

Al artículo 20, apartado uno, número 8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido se incorpora la siguiente letra:

- l) Cooperación para el Desarrollo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Estructura Orgánica del Consejo de Cooperación al Desarrollo y de la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional

En tanto no se establezca el desarrollo reglamentario previsto en esta Ley, seguirá subsistente la estructura orgánica recogida en los Reales Decretos 795/1995, de 19 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo de Cooperación al Desarrollo, y 451/1986, de 21 de febrero, por el que se crea la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.

Segunda. Regulación de la Comisión Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo

Hasta que se elabore la normativa a la que se refiere el artículo 24.1, la Comisión Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo seguirá rigiéndose por su regulación específica e informará los proyectos a que se refiere dicho precepto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Normas derogadas

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

2. Sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Transitoria, quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

— Real Decreto 795/1995, de 19 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo de Cooperación al Desarrollo.

— Real Decreto 451/1986, de 21 de febrero, por el que se crea la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.

3. Queda asimismo derogada la Disposición Adicional Segunda de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. Desarrollo reglamentario

Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias, incluidas las relativas al régimen económico y presupuestario.

PRIMERA bis (nueva)

El Gobierno promoverá en el plazo de un año cuantas acciones y reformas legislativas sean precisas para la aprobación del Estatuto de los Cooperantes Expertos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 bis) de esta Ley.

SEGUNDA. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».